

Benito Juárez

***Documentos,
Discursos y Correspondencia***

Tomo 2, capítulo VII

Selección y notas de
Jorge L. Tamayo

Edición digital coordinada por
Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva

Tomo revisado y anotado por
Luis Alberto Arriola Viruell

Versión electrónica para su consulta
Aurelio López López



Año 2006

Tomo 2, capítulo VII

**Anotado y revisado por
Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva
y Luis Alberto Arriola Viruell
(UAM – Azcapotzalco)**

Capítulo VII

**Nuevamente gobernador de Oaxaca:
Lleva la tranquilidad y el orden**

Año de 1856

CAPÍTULO VII

NUEVAMENTE GOBERNADOR DE OAXACA: LLEVA LA TRANQUILIDAD Y EL ORDEN

Año de 1856

Desde que triunfó el movimiento de Ayutla se consideró, fuera y dentro del estado de Oaxaca, que Juárez era el hombre abocado para desempeñar el puesto de gobernador de esa entidad. Por ello el general Martín Carrera, Presidente provisional nombrado por los militares de la guarnición de México, se apresuró a designarlo.

Las autoridades santannistas de Oaxaca no pusieron reparo alguno y se dirigieron a Juárez, en Cuernavaca, desde octubre de 1855, llamándolo a tomar posesión del cargo, lo que no atendió porque consideró que “el general Carrera carecía de misión legítima para hacer ese nombramiento”, por lo que de inmediato contestó “que no podía aceptarlo mientras no fuese hecho por autoridad competente”.

Después de la crisis política que culminó con que el general Juan Álvarez declinara el mando y con la designación del Gral. Ignacio Comonfort como Presidente sustituto, el gabinete de que formaba parte Juárez presentó su renuncia y “el nuevo Presidente organizó su gabinete nombrando, como era natural, para sus ministros, a personas del círculo moderado”.

Con juicio certero, examina Juárez la situación del modo siguiente:

En honor de la verdad y de la justicia, debe decirse que en este círculo había no pocos hombres que sólo por simpatías al general Comonfort, o porque creían de buena fe que este jefe era capaz de hacer el bien a mi país, estaban unidos a él y eran calificados como moderados; pero en realidad eran partidarios decididos de la revolución progresista, de lo que han dado pruebas

irrefragables después defendiendo con inteligencia y valor los principios más avanzados del progreso y de la libertad; así como también había muchos que aparecían en el partido liberal como los más acérrimos defensores de los principios de la revolución, pero que después han cometido las más vergonzosas defecciones, pasándose a las filas de los retrógrados y traidores a la patria. Es que unos y otros estaban mal definidos y se habían equivocado en la elección de sus puestos.¹

Por ello, nada extraño es que, si bien la nueva administración veía en Juárez a un *puro*, [que] además había adquirido prestigio nacional con la expedición de la Ley que abolió los fueros, se le invitara para que siguiera colaborando. Se le pidió fuera a Oaxaca “a restablecer el orden legal subvertido por las autoridades y guarnición que habían servido en la administración del general Santa Anna, que para falsear la revolución habían secundado el plan del general Carrera, y que, por último, se habían pronunciado contra la Ley de administración de justicia”.

Con sobrarla razón Jorge Fernando Iturribarria señala que para “Juárez la situación resultaba excepcionalmente peligrosa pues había indicios ciertos de una conjura organizada para no dejarlo tomar el poder y desacreditarlo en su propia tierra”.²

La situación no era muy atractiva, pero Juárez tuvo a la necesidad de luchar por “la subsistencia de esta ley” y también consideró que no podía eludir el llamado de una autoridad legítima, por lo que aceptó “sin vacilación el encargo”.

El 23 de diciembre de 1855 tomó la diligencia en la ciudad de México que lo condujo a Puebla en compañía de Ignacio Mejía, Manuel Ruiz, Félix Romero y el señor Fagoaga, para seguir a Tehuacan y luego continuar rumbo a Huajuapán.

¹ Juárez, *Apuntes para mis hijos*, tomo I, capítulo I de esta obra.

² Jorge Fernando Iturribarria, *La Generación Oaxaqueña de 57*. México, 1856.

Hace su entrada al estado por la Mixteca, recibiendo el apoyo de las guardias nacionales de Oaxaca y Guerrero, que el gobierno de Comonfort pone a su disposición.

Dos años más tarde el licenciado José María Díaz Ordaz, en funciones de gobernador, reseñaba los acontecimientos de esos días en forma tan objetiva, que vale la pena reproducir algunos de sus párrafos:

Destruídas las instituciones federativas por la revolución iniciada en Jalisco en 1852, el estado (de Oaxaca) tuvo que participar de los sufrimientos que causó a la República la ominosa dictadura que la rigió por 30 meses. En agosto de 1855, al verificarse la fuga del general Santa Anna, el pueblo, levantándose enérgico y poderoso, aunque desarmado, proclamó el Plan de Ayutla e hizo triunfar la revolución liberal, no obstante la numerosa fuerza del ejército que guarnecía el estado y pretendió falsear el movimiento, consiguiéndose en aquel acto que las armas cediesen a la opinión pública representada por una inmensa mayoría de ciudadanos de todas clases que, trasportados de júbilo, recorrían las calles vitoreando la libertad.

Comenzaba apenas el estado a reorganizarse, en medio de las azarosas circunstancias de aquellos meses, cuando el día 11 de diciembre la mayor parte de la guarnición, con motivo de la Ley que restringía los fueros, dio el escándalo de rebelarse y de atacar a los que fieles a sus principios habían encerrándose en la fortaleza de Santo Domingo a sostener la autoridad, el respeto a la ley y el buen nombre del estado, El desprestigio del movimiento, que no fue apoyado de ninguna manera por la opinión pública y la conducta vacilante e incierta de los que ocultamente lo dirigieron, hizo que no progresara y que las cosas continuasen en el estado que antes, teniendo Oaxaca que lamentar, sin embargo, la muerte de algunos de sus valientes nacionales y de otras personas indefensas que fueron lanceadas inhumanamente en las calles de la ciudad, sacrificadas a la ambición y al doble y tortuoso manejo de los autores de la sedición.

No obstante tal desengaño, que importaba una solemne protesta del buen sentido contra los sediciosos, el día 2 de enero de 1856, una parte de esa misma guarnición, encerrada en Santo Domingo, se pronunció secundando el plan proclamado por el general (López) Uruga en Tolimán y desconociendo la ley de 23 de noviembre del año anterior; pero la autoridad, entonces, apoyada por alguna fuerza fiel y, sobre todo, por multitud de ciudadanos que espontánea y generosamente se presentaron en el cuartel del Carmen, logró imponer a los disidentes, haciéndolos rendir a discreción al tercer día para que fuesen juzgados conforme a las leyes.

La entrada del Excmo. Sr. don Benito Juárez el día 10 del propio mes, vino a consolidar la tranquilidad pública, porque, apoyado no sólo en la brigada que trajo consigo, sino en el prestigio que merecidamente disfruta entre los oaxaqueños, pudo dictar radicales medidas para evitar, como ha sucedido, que volvieran a repetirse tales escándalos en esta Capital.³

También, en el orden familiar, Juárez debe haber regresado a la patria chica con alborozo. Desde mayo de 1853 en que fue detenido en Etlá y desterrado del estado de Oaxaca, no había vuelto a ver a su familia, la que había tenido que buscar el amparo del compadre y siempre fiel amigo Miguel Castro, quien lleva a Margarita y a sus hijos, en los días de la revolución de Ayutla, a la sierra “en previsión de una anunciada represalia”.

Investido de los cargos de gobernador provisional y comandante de las armas, hace su entrada en la ciudad de Oaxaca el 10 de enero de 1856; el pueblo sale a esperarlo a las afueras y el obispo, cumpliendo el ceremonial tradicional lo recibió con *Te Déum*, que fue censurado por los

³ José María Díaz Ordaz, *Exposición que en cumplimiento de artículo 83 de la Constitución del Estado hace el Gobernado del mismo al Soberano Congreso al abrir sus sesiones*, Oaxaca, 1858.

conservadores intransigentes que no veían ya con buenos ojos al autor de la ley que había suprimido los fueros.

Inmediatamente Juárez inició su labor, que ahora no sería preferentemente administrativa y constructiva; tenía que ser reformista y aun demoledora de un pasado que estaba frenando la evolución de la nación y en particular a Oaxaca.

“Lejos de emprender la política conciliatoria que se le aconseja - comenta Iturribarría-, Juárez se decidió por los métodos radicales. Fortaleció el partido liberal y eliminó de los puestos claves a los tráfugas y a los débiles, a pesar de que se perfilaba, con visos de certeza, la versión de que los moderados de México habían querido inducirlo a un descalabro político que lo eliminara de la política”.

Abre nuevamente el Instituto de Ciencias y Artes del estado, reducido a una escuela preparatoria por el santannismo, restablece la carrera de abogado y hace que la guardia nacional recobre su carácter, etc. Da los mandos superiores y subalternos de esos batallones de la guardia nacional a ex alumnos del Instituto -unos graduados, otros sin título-, “porque sabía de anticipado que ellos no podrían defraudarlo, alimentadas sus mentes, como estaban, en el mismo pensamiento que había conformado su educación en la enseñanza de sus maestros”.⁴

Esos jefes principales seleccionados con acierto fueron los abogados José María Díaz Ordaz, que tarde por su acción y sacrificio sería declarado Benemérito del estado, Tiburcio Montiel, José María Ballesteros, Luis María Garbo y Manuel Velasco.

Sus enemigos de entonces y los contumaces opositores de hoy, señalan que esa política creó “una oligarquía de toga, de abogados militares y de militares abogados”,⁵ En parte tienen razón: creó la contribución más valiosa —si bien democrática— que Oaxaca ha dado a la nación mexicana. Ello explica su destacada presencia en la Guerra de Reforma y la lucha contra la Intervención. Dentro de esas fuerzas se

⁴ Iturribarría, *La generación oaxaqueña*, p.18.

⁵ *Ibidem*, p. 19.

incorpora Porfirio Díaz, quien ya había prestado servicios a la Revolución de Ayutla.

Justo Sierra dice que “Juárez, ocupado a veces en Tehuantepec en sofocar la revuelta, no descuida ninguno de los ramos de la administración; al contrario, jamás habían sido tan bien atendidos. Uno de sus empeños era armar al estado para la terrible guerra que preveía; siempre se empeñó con el gobierno federal en obtener armas, artillería especialmente... y, con objeto de que las guardias nacionales no sólo estuvieran bien instruidas y preparadas para el combate, sino que siempre se hallasen a disposición del partido liberal, organizó una enseñanza de ciencia militar y táctica en el mismo Instituto”.⁶

Sin embargo, Juárez seguía siendo civilista y frente a la ingerencia de los militares, dice al respecto en *Apuntes para mis hijos*:

Me propuse conservar la paz del estado con sólo mi autoridad de gobernador para presentar una prueba de bulto de que no eran necesarias las comandancias generales, cuya extinción había solicitado del estado años atrás, porque la experiencia había demostrado que eran no sólo inútiles sino perjudiciales. En efecto, un comandante general con el mando exclusivo de la fuerza armada e independiente de la autoridad local era una entidad que nulificaba completamente la soberanía del estado, porque a sus gobernadores no les era posible tener una fuerza suficiente para hacer cumplir sus resoluciones. Eran llamados gobernadores de estados libres, soberanos e independientes: tenían sólo el nombre, siendo en realidad unos pupilos de los comandantes generales. Esta organización viciosa de la administración pública fue una de las causas de los motines militares que con tanta frecuencia se repitieron durante el imperio de la Constitución de 1824”.⁷

⁶ Sierra, *Juárez*, p. 102.

⁷ Juárez, *Apuntes*, tomo I, capítulo I de esta obra.

Firme en su obra reformista, para contestar ataques, publica el 26 de enero de 1856 el manifiesto que se reproduce en las siguientes páginas.

Comonfort, en funciones de Presidente, expidió el 15 de mayo de 1856 el Estatuto Orgánico Provisional de la República, que estaría vigente mientras se expedía la nueva Constitución. El Estatuto fue preparado con un criterio absorbente y centralista, en olvido del régimen federal, al grado de que los gobiernos locales quedaban restringidos en sus funciones vitales. Juárez no se muerde la lengua: con valor civil y asesorado por Manuel Dublán, Manuel Ruiz, Félix Romero, Marcos Pérez y Justo Benítez, formula una Representación al Gobierno Federal, en donde se dice que “el Estatuto viene a destruir los intereses legítimos creados por la última revolución”, y que al ponerlo en vigor “reduciría a los gobiernos de los estados a un pupilaje más estrecho todavía del que sufrieron por las leyes que más han favorecido la centralización del poder público”, Comonfort “tuvo la prudencia de no insistir en su cumplimiento”, comenta Juárez.⁸ En las páginas siguientes podrá el lector ver algunas cartas que se refieren al Estatuto.

Se da tiempo para asomarse a otros problemas: reorganizó el Colegio de Abogados, estableció un Consejo Supremo de Salubridad, organizó la Beneficencia Pública con el propósito de substraer la insultante caridad de manos del clero y los ricos, dándole un contenido social; organizó los estudios de preparatoria y medicina en el Instituto, fundó una Escuela Normal en Tlacolula, continuó las obras de construcción del Palacio de Gobierno, enriqueció el Museo del estado, suprimió los pasaportes interiores, o sea, estableció el libre tránsito, e intentó, sin alcanzar buen éxito, suprimir las típicas mayordomías que al amparo del fanatismo, arruinaban a los devotos pueblerinos.

Hace acto de presencia en el escenario nacional en abril de ese año, cuando el Congreso Constituyente discute la *Ley Juárez*, finalmente la aprueba y la incorpora a la Constitución que se estaba redactando. Esto consolida su prestigio en el ámbito nacional.

⁸ Juárez, *Apuntes*, tomo I, capítulo I de esta obra.

A pesar de ser época de lucha, la honesta administración realiza “el milagro ya obrado antes por las manos taumaturgas de Juárez —ha dicho Iturribarria— de multiplicar las monedas en los arcones del tesoro publico”.⁹ Ahora Oaxaca alcanzó un modesto superávit.

El régimen liberal, deseoso de maniatar políticamente al clero, impidiendo que sus recursos económicos siguieran atizando el fuego de la oposición conservadora, expidió el 15 de junio de 1856 la Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas, que se promulgó en Oaxaca el 3 de julio, y es pretexto para que diez días después haya un levantamiento en Tlaxiaco que fue dominado. Pasaron los días y la Ley no podía aplicarse, ni los arrendatarios pidieron adjudicación de los bienes, ni tampoco el público en general. Es que el clero “resistió su cumplimiento y trabajó en persuadir al pueblo que era herética y atacaba a la religión”, lo que no era cierto. “Esta ley —decía Juárez con un dejo de ironía o de socarronería— dejaba al clero... el goce de los productos de dichos bienes y sólo le quitaba el trabajo de administrarlos.” Pero la fiscalización del estado impedía que esas rentas, que debían utilizarse para fines piadosos, se emplearan en fomentar revueltas, como venía sucediendo:

Entonces —dice Juárez en sus *Apuntes para mis hijos*— creía de mi deber hacer cumplir la Ley no sólo con medidas del resorte de la autoridad, sino con el ejemplo, para alentar a los que por un escrúpulo infundado se retraían de usar del beneficio que les concedía la ley. Pedí la adjudicación de un capital de \$ 3,800, si no mal recuerdo, que reconocería una situada en la calle del Coronel, de la ciudad de Oaxaca.¹⁰ El deseo de hacer efectiva esta reforma y no la mira de especular me guió para hacer efectiva esta operación. Había capitales de más consideración en que pude practicar, pero no era éste mi objeto.

⁹ *Historia de Oaxaca*. La Guerra de Reforma p. 52.

¹⁰ Esta casa es la número 60 de la calle de Independencia.

Otro problema básico también abordado. El régimen centralista había seccionado los estados de Oaxaca y Veracruz, creando el territorio de Tehuantepec con sus partes ístmicas, según decreto de 11 de mayo de 1853, Juárez orienta a la diputación oaxaqueña al Congreso Constituyente Federal y logra que, rectificando la división territorial del proyecto de Constitución, se restituya a Oaxaca su territorio tradicional.

Al irse a Oaxaca, a fines de 1855, Juárez siente la necesidad de estar al tanto de lo que ocurre en la capital; le interesa seguir paso a paso la suerte de la revolución liberal, y encarga al joven Matías Romero, brillante colegial del Instituto, recientemente avecindado en México y empleado del ministerio de Relaciones, que le escriba frecuentementeteniéndole enterado de lo que ocurre. El corresponsal cumple eficazmente su cometido y ello nos permite, al seguir este diálogo epistolar que es totalmente inédito, enterarnos de los problemas internacionales, de las crisis ministeriales, de las indecisiones del general Comonfort y, sobre todo, percibir el juicio claro, preciso y definido de Juárez sobre numerosos problemas nacionales.

También, para completar el cuadro de la situación en la perspectiva nacional y entender muchas de las referencias |que se hacen en cartas y documentos, se reproducen algunas que forman parte del Archivo de Juárez y otras del Archivo de Matías Romero y del general Manuel Doblado.

DOCUMENTOS

Año de 1856

SE ORDENA A LA GUARDIA NACIONAL DE OAXACA
SE PONGA A LAS ÓRDENES DE JUÁREZ

Ministerio de Guerra y Marina
Sección de Operaciones

Excmo. Sr. Gobernador de Oaxaca don Benito Juárez

Excmo. Señor:

Hoy digo al señor prefecto y comandante militar de Huajuapán, coronel don Francisco Herrera, lo que sigue:

A fin de que pueda V. S. conservar la tranquilidad pública en las Mixtecas, dispone el Excmo. señor Presidente sustituto que reúna todas las fuerzas de guardia nacional que le sea posible armar, para que unidas con las que lleva el señor general don Marcial Caamaño, y el comandante de batallón don Leandro Díaz, puedan también restablecer el orden en el estado de Oaxaca, obrando en todo de acuerdo con las órdenes del señor gobernador don Benito Juárez, que oportunamente se reunirá a las expresadas fuerzas.

Y lo traslado a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios y Libertad, México, diciembre 17 de 1855.

Manuel Marta de Sandoval

LA GUARDIA NACIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO
EN AYUDA DE LA MISIÓN DE JUÁREZ

Ministerio de Guerra y Marina
Sección de Operaciones

Excmo. Sr. don Benito Juárez,
Gobernador del estado de Oaxaca

Excmo. Señor:

Hoy digo al señor general graduado, don Marcial Caamaño, lo que sigue:

El C. Sr. Presidente sustituto me manda prevenir a V. S. que inmediatamente reúna una fuerza de 500 hombres de infantería y caballería de la guardia nacional de ese distrito y marche violentamente con ella a Huajuapán de León, a donde esperará al Excmo. Sr. gobernador de Oaxaca, don Benito Juárez, para que, conforme a sus instrucciones, se dedique V. S. al restablecimiento del orden en dicho Estado. S. E. manda que antes de salir V. S. de Tlalpan procure dejar asegurada la plaza con la guarnición competente y encargado del mando una persona de su confianza. Para proporcionarse V. S. los recursos necesarios para su marcha, levantará un préstamo de \$ 2,000 en el comercio, girando contra la Tesorería del estado de Puebla, donde se pagará en el acto otra cantidad a los prestamistas.

Y lo traslado a V. E. para su conocimiento, añadiéndole que S. E. el Presidente faculta a V. E. extraordinariamente para obrar en el ramo de

Guerra, a fin de restablecer el orden en el estado de Oaxaca lo más pronto posible.

Dios y Libertad, México, diciembre 17 de 1855.

Manuel María de Sandoval

[Nota autógrafa de Juárez]

Enterado, y que cuanto antes marcharé al estado de Oaxaca para llenar la orden del Excmo. señor Presidente. Se le dan las gracias por la confianza que me dispensa autorizándome para obrar extraordinariamente en el ramo de Guerra. Contestada en 21 de diciembre de 1855.

SE LE DA LIBERTAD DE ACCIÓN
COMO GOBERNADOR DE OAXACA

Reservada

Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación,
Sección 1ª

Excmo. Sr. gobernador de Oaxaca
Don Benito Juárez

Excmo. señor:

Confiando el Excmo. señor Presidente sustituto en el patriotismo, honradez y actividad que distinguen a V. E., le faculta ampliamente para que dicte cuantas medidas crea necesarias para restablecer el orden en el estado de su digno mando. Lo que de orden suprema tengo el honor de decir a V. E. para su inteligencia, esperando que obrará con la energía necesaria para lograr el objeto indicado.

Protesto a V. E. las seguridades de mi aprecio y consideración.

Dios y Libertad, México, diciembre 20 de 1855.

(José María) Lafragua

[Nota de Juárez:]

Diciembre 22 de 1855

Enterado con satisfacción, y en los casos precisos, y con la prudencia y energía que demanden las circunstancias, se usará de las amplias facultades a que se refiere esta orden suprema cumplida en la fecha.

JUÁREZ PRESTA JURAMENTO
COMO GOBERNADOR DE OAXACA

Secretaría de Estado y del departamento de Gobernación
Sección 2ª

Excmo. Sr. Gobernador del Estado de Oaxaca
don Benito Juárez

Excmo. señor:

Con esta fecha digo al Excmo. Sr. don José M. García, gobernador del Estado de Oaxaca, lo que sigue:

Habiendo prestado hoy ante el Excmo. señor Presidente sustituto, el Excmo. Sr. don Benito Juárez, el juramento respectivo para desempeñar el cargo de gobernador de ese estado, me ordena lo avise a V. E., a fin de que le entregue inmediatamente el mando político a dicho Sr. Juárez, no dictando V. E. providencia alguna desde que reciba la presente comunicación hasta que se presente el señor Juárez, Todo lo que le digo de orden suprema protestándole a vez las seguridades de mi aprecio.

Lo que tengo el honor de decir a V. E. para su inteligencia, reproduciéndole las consideraciones de mi afecto.

Dios y Libertad, México, diciembre 20 de 1855.

(José María) Lafragua

SE NOTIFICA A LA AUTORIDAD MILITAR
EL NOMBRAMIENTO DE JUÁREZ

Ministerio de Guerra y Marina
Sección de Operaciones

Excmo. Sr. Gobernador de Oaxaca,
don Benito Juárez

Excmo. señor:

Con esta fecha digo al señor comandante de Oaxaca lo que sigue:

Habiendo sido nombrado gobernador de ese estado el Excmo. Sr. don Benito Juárez, ordena el Excmo. señor Presidente sustituto, que le preste V. S. toda su cooperación para que entre a ejercer sus funciones, en el concepto de que cualquiera omisión en este punto, será de la más estrecha responsabilidad de V. S.

Y lo inserto a V. E. para su conocimiento.

Dios y Libertad, México, diciembre 21 de 1855.

Manuel María de Sandoval

[Nota autógrafa de Juárez:]

Diciembre 22 de 1855

Enterado y que se le dan las gracias. Cumplido en la fecha.

LE PRODUCEN SATISFACCIÓN
LOS ELEMENTOS MILITARES PUESTOS A SU DISPOSICIÓN

Excmo. señor Ministro de la Guerra
México

Por la orden suprema que V. E. dirigió en 17 del corriente al Sr. prefecto y comandante militar de Huajuapán, coronel don Francisco Herrera y que en la misma fecha se sirvió insertarme, quedo enterado con satisfacción de que S. E. el Presidente sustituto se ha servido prevenirle que reúna todas las fuerzas de guardia nacional que pueda armar, para que con ellas se ponga a mi disposición y obsequie las órdenes que le comunique con el fin de restablecer en Oaxaca el orden y la tranquilidad pública.

Reitero a V. E. mi atenta y distinguida consideración.

Dios y Libertad, México, diciembre 22 de 1855.

Benito Juárez

PRECISA LA DETERMINACIÓN A GOBERNAR OAXACA
CONFORME A LAS LEYES

Excmo. señor gobernador y comandante general de Oaxaca

Excmo. señor:

Con satisfacción he recibido la apreciable comunicación de V. E., fecha 29 del corriente, en que me manifiesta estar sorprendido por la reunión de fuerzas que verifica en Huajuapán el señor coronel don Francisco Herrera, y el temor que tiene de que opere sobre esa capital sin necesidad, cuando expresa que V. E. y la guarnición de la misma están dispuestos a obedecer en un todo las órdenes del Supremo Gobierno.

Natural era que, perturbado el orden público en esa capital, el Supremo Gobierno no fuera indiferente a un movimiento cuya diversa marcha no podía alcanzar, y que desde luego dictara, como dictó, las órdenes correspondientes a fin de que fuerzas combinadas en direcciones operaran sobre esa capital. En consecuencia, libró las necesarias, entre otras, al Sr. coronel don Francisco Herrera, previniéndole la reunión de las Mixtecas, para que puesto a mi disposición con ellas y esperando mi llegada a Huajuapán, operase según mis disposiciones. Por lo mismo, este jefe obra por disposiciones expresas del Supremo Gobierno y sus operaciones no pueden ser otras que las que con presencia de las circunstancias tenga por conveniente indicarles. En concepto, ni las fuerzas del señor coronel Herrera, ni otra alguna, se dirigirán a esa capital sin expresa orden mía, ni tendrán en el caso otro objeto que el de conservar la tranquilidad pública y el de restablecer el imperio de la ley y el orden, si aún fuere del todo necesario.

Me complazco en esperar que este caso no se presentará, ya porque V. E. y la guarnición de esa capital se manifiestan en el mejor sentido, ya

porque las fuerzas que están puestas a mi disposición dependen de la autoridad suprema, que sólo anhela por el restablecimiento del orden y el respeto debido a las leyes; mas para realizar noble mira, creo conveniente que V. E., por su parte, dicte las providencias necesarias para mantener en la guarnición ese espíritu de acatamiento al Gobierno Supremo, la mejor disciplina y cordura en sus procedimientos, así como para que el pueblo todo, tranquilo y en completa paz, descanse en la justificación de sus autoridades y de ella solamente espere el remedio de sus males, en concepto de que estoy resuelto a reprimir severamente cualquiera exceso y hacer que se castigue cualquier acto que tienda a perturbar la paz, cuales fueren las personas que lo intenten y sean cuales fueren los pretextos de que se valgan.

Dispuesto a gobernar el estado conforme a las leyes, firmemente determinado a no permitir que por motivo alguno se falte a su puntual acatamiento, mi misión importante se dirige a restablecer y consolidar la paz como elemento principal de buen gobierno. Para este efecto, espero de V. E. una cumplida y eficaz cooperación, y me prometo que la guarnición y el pueblo oaxaqueño que tanto me conocen, confiarán en la rectitud de mis intenciones y en la justicia con que debo obrar. Bajo este concepto y dentro de dos días que habré llegado a Huajuapán, dirigiré a V. E. mis comunicaciones y, de acuerdo con sus deseos y buenas disposiciones, me ocuparé preferentemente de tranquilizar los ánimos, de sistemar la paz, de hacer respetar las leyes y de afianzar de una manera sólida las garantías de los ciudadanos.

Entretanto, tengo el honor de repetir a V. E. las protestas de mi atenta y distinguida consideración.

Dios y Libertad, Tehuacan, diciembre 31 de 1855.

Benito Juárez

ES NOTORIO EL ENTUSIASMO DE OAXACA
POR LA CAUSA DE LA LIBERTAD

Gobierno del Estado de Oaxaca

Excmo. señor ministro de Gobernación

Excmo. señor:

Disfruto el honor de poner en conocimiento de V. E., para que se sirva elevarlo al del Excmo. señor Presidente de la República, que hoy he llegado a esta capital y observado en sus habitantes el mayor entusiasmo para sostener la causa de la libertad.

Demostraciones de regocijo de todas clases que ha habido, me confirman en esta idea, y el que no hay preexistencia que induzca a creer lo contrario.

Felicito, pues, al supremo magistrado de la nación por el estado que guarda la tranquilidad en las poblaciones que han confiado a mi cuidado, protestándole las seguridades de mi respeto, y a V. E. las de mi consideración y muy distinguido aprecio.

Dios y Libertad. Oaxaca, enero 10 de 1856.

Benito Juárez

ORGANIZACIÓN
DE CUERPOS DE GUARDIA NACIONAL

Excmo. señor ministro de Gobernación

Excmo. señor:

Quedo enterado por la comunicación de V. E. de 29 del mes anterior, de que el Excmo. señor Presidente substituto de la República se ha servido determinar que inmediatamente se organicen cuerpos de guardia nacional, con objeto de que el pueblo armado esté pronto a defender la libertad que ha conquistado, de la cual pretenden despojarle los reaccionarios, que no cesan en su intento de trastornar el orden público. Este Gobierno se ocupa ya en dictar las providencias correspondientes para el exacto y puntual cumplimiento de lo que se trata; y así suplico a V. E., se sirva hacerlo presente a S. E., aceptando a la vez las seguridades que tengo el honor de renovarle, de mi distinguido aprecio.

Dios y Libertad. Oaxaca, enero 12 de 1856.

Benito Juárez

EL ESTABLECIMIENTO DE LA MONARQUÍA EN MÉXICO
PROMOVIDO POR HARO Y TAMARIZ

(Excmo. Ministro de Gobernación)

Excmo. señor:

Por la comunicación de V. E. de 8 del actual, que recibí por el último correo, quedo enterado de cuanto expone respecto de los movimientos reaccionarios de que se trata y de la conducta que ha observado el Supremo Gobierno, no sólo para sofocar, como felizmente se ha conseguido, los de Guanajuato y esta capital, sino para disuadir de su intento a don Antonio Haro y Tamariz, contra quien había fundadas sospechas de que regenteaba una conspiración que tenía por objeto el establecimiento de una monarquía en México, las que habiéndose al fin confirmado con el plan y demás documentos relativos que se le encontraron, fue ya necesario disponer su aprehensión y marcha para Veracruz, logrando fugarse en el tránsito.

Veo por la citada comunicación, que el Excmo. señor Presidente considera indispensable para el mantenimiento de la paz tan conveniente en la época en que la nación va a constituirse, la aprehensión del Sr. Haro, y, en ese supuesto y por el acatamiento que es debido a las determinaciones supremas, no dude V. E. que la relativa a la aseguración de la persona de que se trata, si toca en algún punto del estado, tendrá su verificativo, pues al efecto dicto ya las providencias correspondientes.

En cuanto a la organización de la guardia nacional, que debe ser el muro en que se estrellen los esfuerzos de los enemigos de la libertad, ocupará de toda preferencia mi atención, comenzándose por dar al momento las órdenes correspondientes para que, conforme al reglamento del estado, se continúen los alistamientos de esa milicia, que se habían

suspendido por la revolución de los días 11 de diciembre y 2 del actual; por lo que en esta parte también quedarán obsequiados los deseos de S. E., a quien suplico a V. E. dé cuenta, con esta comunicación, renovándose las protestas de mi distinguido aprecio.

Dios y Libertad, Oaxaca, enero 17 de 1856.

Benito Juárez

JUÁREZ RECUERDA CON AFECTO A MATÍAS ROMERO

En Oaxaca, enero 20 de 1856

Sr. don Matías Romero

Amigo mío muy querido:

Con el objeto de saludarlo pongo a usted ésta, y con el de participarle que el Sr. Juárez ha hecho de usted muy buenos recuerdos, lo mismo que el Sr. Lic. don Marcos Pérez, quien pocos días me manifestó lo sensible que le era no haber podido escribir a usted a causa de sus pequeños viajes a la Mixteca.

Poseo en mi cuerda toda la confianza del Sr. Juárez y aún creo merecerle alguna estimación; deseo corresponder a sus bondades con cuanta eficacia y celo me sea dable.

Mañana es el primer baile de máscaras y para el martes se le prepara un verdadero sarao a S. E.

Ayer marchó para esa Capital el 4º regimiento de caballería.

Desea ver sus letras quien sinceramente se repite su amigo, que le desea felicidades y b. s. m.

Juan N. Celis

COMPENSIVO, REPARA UNA ARBITRARIEDAD

Benito Juárez,
Gobernador y Comandante General
del Estado de Oaxaca,
a sus habitantes hago saber:

Que habiéndose cometido con la guardia nacional del mismo un acto arbitrario cuando se le declaró batallón activo, sin que procediera sorteo ni otra formalidad de las que la ley exige, en justa reparación y en uso de las facultades de que me hallo investido por el Supremo Gobierno de la nación, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo 1º. El batallón activo de Oaxaca y los demás de su clase que pertenezcan al estado y aun sobre las armas, recobran desde esta fecha el carácter de guardias nacionales. En consecuencia, y en atención a los padecimientos que han sufrido en una larga campaña, arrebatados del seno de sus familias de una manera violenta e ilegal, son libres para continuar sus servicios en la guardia nacional que se halla sobre las armas, si así lo manifestaren voluntariamente, o para retirarse a sus casas perteneciendo a la guardia nacional de reserva.

Artículo 2º. Los oficiales que hoy sirven en esta fuerza y que quieran prestar sus servicios al estado, serán considerados por el gobierno de la manera que estime conveniente.

Artículo 3º. El gobernador del departamento del Centro, con acuerdo del gobierno del estado, señalará los cuerpos donde deben continuar sirviendo los individuos que quedan sobre las armas y expedirá resguardos a los que queden en los cuerpos de reserva.

Artículo 4°. El tesorero general del estado recogerá los depósitos particulares para introducirlos en el general, previo formal inventario de que remitirá un tanto a la secretaría del Gobierno.

Por tanto mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento.

Dado en el Palacio del Gobierno de Oaxaca a 21 de enero de 1856.

Benito Juárez

Cenobio Márquez
Secretario

DISCURSO QUE EN LA REINSTALACIÓN
DEL INSTITUTO DE CIENCIAS Y ARTES DEL ESTADO
PRONUNCIÓ BENITO JUÁREZ

Señores:

Cumple hoy el gobierno del estado con uno de sus gratos deberes al reinstalar el Instituto de Ciencias. Persuadido de que la instrucción pública es el fundamento de la felicidad social, el principio en que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos, una de sus primeras providencias ha sido volver a esta ilustre casa el esplendor que los enemigos de la ilustración y de todo progreso habían quitádole en una época de funesto recuerdo para Oaxaca. El Gobierno, que conoce la importancia de la instrucción pública, la influencia poderosa que ejerce en la moralidad y adelantos sociales, está resuelto a darle todo el impulso que las necesidades del Estado demanden, protegiendo empeñosamente su desarrollo.

El juramento que acabáis de prestar, señores catedráticos, de cumplir leal y fielmente vuestros deberes, es una garantía para los oaxaqueños, y el gobierno, que conoce vuestra ilustración y patriotismo, confía en que llenaréis debidamente la honrosa tarea del profesorado, correspondiendo a la confianza que hoy deposita la sociedad en vosotros, encomendándoos la instrucción de la juventud. Que vuestra dedicación y empeño vuelvan al Instituto su antiguo brillo, para que esa juventud que, ávida de saber, debe educarse bajo vuestra dirección, contribuya algún día al engrandecimiento de su patria, a su honor, ya que hoy sólo forma su esperanza.

(Oaxaca, enero de 1856.)

CONTESTACIÓN DEL SR. CONSEJERO Y DIRECTOR,
LICENCIADO MARCOS PÉREZ

Excmo. señor:

Conocida la ilustración de V. E. y su ardiente amor a la libertad y mejoras sociales, los oaxaqueños esperaban como una de las primeras medidas de su nueva administración la reinstalación del Instituto de Ciencias y Artes, que en días mas felices ha dado gloria al Estado. En efecto, no se han equivocado, pues V. E. cumpliendo con uno de sus sagrados deberes satisface hoy esa esperanza.

Son notorios, señor Excmo., los atrasos que la instrucción pública ha sufrido en el estado durante un gobierno enemigo de la ilustración y de todo adelanto; pero estos males cesarán, dispensando V. E. a aquélla la empeñosa protección que ofrece, y Oaxaca contara con un porvenir más halagüeño.

Los señores catedráticos, por su parte, para quienes no es una vana fórmula el juramento que acaban de prestar, de cumplir fielmente sus deberes, protestan corresponder a la elevada confianza que V. E. les ha dispensado al nombrarlos, llenando cuanto les fuere posible la honrosa tarea del profesorado y educando con esmero a la juventud que algún día será útil a la Patria.

(Oaxaca, enero de 1866.)

RATIFICA SU DECISIÓN DE OBRAR CON ENERGÍA
PARA LOGRAR EL TRIUNFO
DE LA REVOLUCIÓN DE AYUTLA

Oaxaqueños:

Por extraordinario que he recibido del gobernador del departamento de Teotitlán del Camino, se me ha participado que el resto de las fuerzas del general Santa Anna se ha posesionado de la ciudad de Puebla el día 24 del corriente, habiéndose retirado los defensores de ella a la capital de la República, Como el silencio del gobierno sobre este suceso pudiera servir de pretexto a los enemigos de la paz y de la libertad para alarmar al público y extraviar la opinión, es de mi deber dirigiros la palabra, anunciando con franqueza lo que pasa, para que no se crea que el acontecimiento es de tal importancia que el gobierno se ve obligado a ocultarlo por temor. No, oaxaqueños: El gobierno sanguinario del Gral. Santa Anna, que hace un año contaba con un ejército numeroso y arreglado en toda la nación, que tenía un jefe que lo movía a su arbitrio, que disponía de todas las rentas nacionales, y que había sistemado el espionaje, la persecución y el terror por medio de agentes activos e inmorales que obedecían ciegamente su voluntad, no aterrorizó a los pueblos que, empobrecidos y desarmados, supieron desafiarlo y ahuyentarlo bajo el estandarte glorioso de libertad y progreso tremolado en Ayutla por el ilustre ciudadano Juan Álvarez. La suerte se ha cambiado hoy. Los pueblos armados y organizados guardan una actividad imponente, y el gobierno moribundo del Gral. Santa Anna se ve reconcentrado en la ciudad de Puebla, que será su sepulcro. Allí se consumará la revolución de Ayutla y la nación será satisfecha con todas las exigencias que ha demandado para afianzar su libertad.

Oaxaqueños: si las medidas arbitrarias del Gral. Santa Anna nos impidieron tomar parte en la lucha al principio de la revolución, hoy es diferente nuestra posición. Sigamos. Unamos nuestros esfuerzos a los de los valientes que se batan en defensa de la libertad.

Militares que alguna vez habéis servido bajo las banderas de la tiranía, recordad que vuestra divisa es el honor y la lealtad, y que las armas que la nación ha colocado en vuestras manos sólo debéis empuñarlas para sostener la libertad y sus derechos. Cumplid con este sagrado deber y la patria reconocida estimará debidamente vuestros servicios para recompensarlos.

Guardias nacionales: preparaos y estad listas para que a la voz de vuestro jefe, que es el gobierno, acudáis al punto en que la patria y la libertad demanden vuestra bravura para defender sus sacrosantos derechos.

Oaxaqueños todos: no escuchéis; despreciad las pérfidas insinuaciones de los enemigos de vuestro reposo y de vuestra libertad, Nada temáis bajo mi administración, que si bien es cierto esta resuelta a obrar con la decisión y energía que es conveniente para cooperar por su parte al triunfo completo de la revolución iniciada en Ayutla, también lo es que, consecuente con los principios proclamados por ella, su principal misión es respetar y hacer que se respeten las garantías del hombre y del ciudadano. Descansad, pues, en la confianza de que al dictar las medidas indispensables para el triunfo de la revolución, no pierde de vista vuestros derechos y vuestra libertad, que sostendrá aun con el sacrificio de su vida, vuestro conciudadano y amigo.

Oaxaca, enero 26 de 1856.

Benito Juárez

RECLAMA ENÉRGICAS MEDIDAS FRENTE A LOS
REACCIONARIOS QUE TOMARON PUEBLA

Gobierno del Estado de Oaxaca

Excmo. señor ministro de Gobernación
México

Excmo. señor:

Este gobierno se ha impuesto por la comunicación de V. E., fecha 24 del mes anterior, de los términos en que se efectuó la ocupación del Estado de Puebla por las fuerzas de los reaccionarios, y también se ha enterado de que para reducirlos al orden se toman ya las providencias correspondientes por el Supremo Gobierno de la nación.

Al poner V. E. tal incidente en mi conocimiento, se sirve recomendarme de parte del Excmo. señor Presidente de la República, tome cuantas providencias crea conducentes a impedir el entronizamiento de un partido que, cuidando poco o nada del progreso o felicidad del país, sólo busca el engrandecimiento personal de los hombres que lo forman; y aunque ya he dictado las medidas que he juzgada oportunas para impedir que el mal cunda a la demarcación de mi mando, lo que considero difícil, seguiré obrando en este negocio con la actividad y eficacia que demanda por su misma naturaleza.

Dios y Libertad. Oaxaca, febrero 7 de 1856.

Benito Juárez

LA CAUSA DE LA LIBERTAD
Y LA NECESIDAD DEL SISTEMA FEDERAL

Oaxaca, marzo 6 de 1856

Excmo. señor gobernador don Ángel A. Corzo,
Chiapas

Muy señor mío y apreciable amigo:

Por su favorecida de 29 de febrero último, quedo impuesto con mucha satisfacción de que se ha dispuesto por usted la marcha de 150 hombres de ese estado, para auxiliar al Gobierno Supremo en la lucha que sostiene contra los reaccionarios en Puebla. Muy honrosa es para usted y para el estado que dignamente gobierna esta patriótica medida, pues es por cierto la primera vez que Chiapas hace marchar sus hijos a larga distancia para defender la causa de la libertad.

De toda preferencia, como usted desea y se sirve insinuarme en su apreciable carta.¹¹ He dicho que si llegase el caso de que la fuerza siga su marcha, porque tal vez reciba usted orden de suspender la remisión de tropas, ya porque el negocio de Puebla concluya dentro de breves es muy probable, o bien porque las fuerzas del Supremo Gobierno que ascienden a 12,000 hombres, suficientes destruir a los reaccionarios de Puebla que hoy se hallan en una situación desesperada.

Siento mucho que en Soconusco se le llame a usted la atención por los conatos de sedición del prefecto Chacón; pero me consuela el buen sentido en esos pueblos que con la noble decisión que usted tiene de

¹¹ La redacción es difusa hasta el final del párrafo. Tal vez se haya pasado transcribir alguna parte de ella al copista. HCHS.

sacrificarse en defensa de la libertad y de la nacionalidad en nuestro país, se nulificarán enteramente los proyectos criminales en nuestros enemigos. No dudo, por lo mismo, que las tentativas de Chacón queden reducidas a sólo su deseo; sin embargo, le agradeceré mucho que como me ofrece, me comunique lo que vaya ocurriendo este negocio que interesa a todo mexicano.

Celébrase mucho que cese el disgusto que había causado los nombramientos de juez y promotor de ese distrito, pues si el Gobierno Supremo hace, como usted me dice, la variación que corresponde, desde luego todo habrá quedado allanado legal y pacíficamente. Sin conocimiento práctico de las personas y cosas de ese estado, no se puede en las disposiciones que se dictan desde el centro y con el negocio de que se trata; se presenta un hecho más que justifica la necesidad del sistema federal, que es necesario sostener a todo trance para dar ser y prosperidad a cada uno de los estados de la República.

Por los periódicos que le remito se impondrá de las últimas noticias que aquí se han tenido del estado que guardan los reaccionarios. La sedición de Ulúa, la prisión de Uruga y la instalación del Congreso Constituyente, son hechos tan importantes que bastan por sí solos para reducir a nulidad el partido reaccionario.

Soy de usted amigo afectísimo y s. s. q. b. s. m.

Benito Juárez

DICTAMEN SOBRE LA LEY JUÁREZ ¹²

Señor:

Cada uno de los individuos de la comisión de justicia que subscribimos, había leído y estudiado la ley que sobre administración del ramo y organización de los tribunales expidió el Supremo Gobierno en 23 de noviembre del año próximo pasado; pero tal estudio, que debimos emprender en virtud de nuestra profesión, no es el que se necesitaba para considerar la ley en su conjunto y en sus detalles, a fin de consultar a Vuestra Soberanía su aprobación o reprobación, en todo o en parte, ya que se ha pasado a la comisión la proposición del señor diputado Mata, en la que pretende que se apruebe. Examinando la ley de este modo, encuentra la comisión que ella contiene la consignación de un gran principio político: la novedad de la organización judicial del Distrito [Federal]; el restablecimiento de la Suprema Corte y de la Corte Marcial y el de los Tribunales de Circuito y Distrito en los estados y territorios, y además de esto algunas otras novedades poco importantes en cuanto a procedimientos judiciales. El principio consignado en la ley es un gran paso hacia la igualdad social, pues que la abolición del fuero civil, en cuanto a los eclesiásticos, y del civil y criminal por delitos comunes en cuanto a los militares, es la satisfacción de dos necesidades que reclamaban no sólo la consecuencia con los principios democráticos, sino las circunstancias particulares de nuestra sociedad, la que ha servido de constante rémora para sus adelantos la preponderancia de las citadas clases.

¹² Sesión del día 15 de abril de 1856 del Congreso Constituyente en la ciudad de México.

No se propone aquí la comisión disertar sobre las facultades que haya tenido el Supremo Gobierno para suprimir los fueros: toda la prensa del país ha sostenido este punto en favor de la ley y de una manera victoriosa e incontestable. Para la comisión sería muy largo el trabajo de extractar siquiera las principales razones y fundamentos que en apoyo de la ley se han alegado; pero esta tarea sería además inútil, puesto que todos los diputados han visto la cuestión en ese terreno, están perfectamente instruidos en ella y de seguro que no hay uno solo que pueda dejar de votar con toda conciencia. No existiendo, pues, duda alguna acerca de las facultades del que expidió la ley, sólo queda por ver si la aplicación del principio de la igualdad es útil y conveniente a la República Mexicana. No se detendrá la comisión en considerar y fundar la conveniencia abstracta de este principio que se ha elevado a la categoría de dogma entre los verdaderos republicanos y sin el cual la democracia sería imposible, porque fundándose en la justicia universal malamente podría ejercerse ésta reconociéndose privilegios en los individuos o en las clases. La comisión está persuadida de que una gran mayoría de los representantes profesa principios por convicciones profundas y no necesita, por tanto, establecerlas doctrinalmente; de manera que la cuestión viene a ser meramente práctica y queda reducida a saber si la extinción de fueros en México y en las presentes circunstancias será una cosa útil a la República, porque allane gran parte de los obstáculos que hasta ahora han impedido su progreso, o si, por el contrario, conviene al país la conservación del referido privilegio.

Fuera de que cualquiera exención es una injusticia y un constante amago a las garantías individuales, cuando el engreimiento con los privilegios, la preponderancia de ciertas clases, y la impunidad de todo género de excesos hacen que se abuse del fuero hasta el punto de que se desatienda toda consideración social en favor de los no privilegiados, entonces, esos privilegios son un cáncer que corroe a la sociedad; acaban por sobreponerse a ella y se agitan después en una celosa disputa entre sí mismos, llegando a hacer imposible todo orden, toda garantía para el pueblo. Si al menos las clases privilegiadas se hubieran contentado con un moderado uso de sus exenciones, y no hubieran llegado, como en

México, al colmo de la exageración, pretendiendo siempre todo para sí y queriendo dominar ya por la fuerza, ya por el abuso de sus cuantiosos recursos, la sociedad no habría tenido tanto que sufrir y, en medio de los obstáculos que se le oponían, se hubiera abierto un camino para su prosperidad; pero cuando hemos visto que la fuerza armada, el oro y el torcido influjo que se había ejercido en las conciencias es lo que ha dado siempre la ley en la República Mexicana; cuando hemos visto la gran dificultad de alcanzar justicia ante los tribunales militares y eclesiásticos, ante el favoritismo que ordinariamente dispensan a los suyos los encargados de administrarla, ante la diversidad de fórmulas y requisitos que sólo sirven para hostilizar al reclamante; cuando, en fin, se fija la atención en la causa de nuestras revueltas y, especialmente en el origen de la que acaba de sucumbir en Puebla, ¿quién dejará de atribuir en gran parte los males que hemos sufrido a la existencia de las prerrogativas y exenciones que con tanto ahínco defienden los amigos del retroceso? Si, pues, por resultados prácticos, antes encubiertos, y ahora puestos en claro, estamos convencidos de que la existencia de los fueros es altamente perniciosa al progreso de la nación, nada tan justo, tan político, tan conveniente, como aprobar, bajo este respecto, la Ley de Administración de Justicia, que fue un gran paso para la conquista de la igualdad republicana.

Merece asimismo ser aprobada, en concepto de la comisión, por haber dado al Distrito [Federal] una organización judicial independiente de los tribunales supremos de la nación, ya porque es meramente accidental la residencia de éstos en la capital de la República, ya porque no hay motivo para que las localidades que comprende el Distrito dejen de tener su poder judicial propio, como lo tiene cualquiera territorio; ya porque no es conveniente ocupar la atención de los tribunales encargados de los negocios generales del país con otros meramente locales, que por su muchedumbre bastan para absolverla toda; ya, en fin, por otras tantas razones que ha expendido la prensa a propósito y, sobre todo, por la experiencia de los buenos resultados que se han obtenido con esta innovación.

La reposición de la Suprema Corte de Justicia y de la Marcial, y la de los tribunales de circuito y de distrito, es también conveniente y hasta cierto punto una necesidad del régimen federativo, que implícitamente está contenido en el Plan de Ayutla, que es hoy la primera ley del país, pues bien se percibe que teniendo los estados y territorios su organización especial de justicia y tribunales propios para sus negocios particulares, es decir, estando descentralizada la administración en ramo, es forzoso que haya algunos otros tribunales encargados de los negocios de la nación.

Por último, la ley que examinamos contiene algunas otras disposiciones nuevas, de orden muy secundario y que se refieren a los trámites de los juicios. Sobre éstas cree la comisión que nada debe hacerse, porque no afectan esencialmente a las grandes necesidades políticas que la ley se propuso atender; porque la supresión de cualquiera de aquellas medidas ocasionaría un hueco y la necesidad de llenarlo de algún modo y, porque en concepto de los que suscriben, esto no puede hacerse por el Congreso, puesto que la facultad revisora que le concede el artículo 5º del Plan de Ayutla, no importa la de modificar las leyes legislando de nuevo, sino sólo la de aprobar o reprobado el acto, en todo o en parte. El Supremo Gobierno es el que, en virtud de las facultades que le concede el artículo 5º del propio Plan, puede introducir en estos puntos las alteraciones que juzgue convenientes.

Por todo lo expuesto, la comisión concluye, sujetando a la deliberación de vuestra soberanía, la siguiente proposición:

Se aprueba la ley que sobre administración de justicia expidió el gobierno interino de la República, en 23 de noviembre del año próximo pasado.

Sala de comisiones del Soberano Congreso. México, abril 12 de 1856.

Mariscal

G. Anaya

Barreda

DISCUSION DE LA LEY JUAREZ Y SU APROBACIÓN ¹³

El señor Barrera, como miembro de la comisión, expuso que había suscrito el dictamen, porque estaba enteramente de acuerdo con la parte resolutive; pero que, sin embargo, no estaba conforme con la expositiva en algunos puntos y, sobre todo, en el relativo al modo en que se entendía la facultad revisora del Congreso. La comisión cree que el Congreso sólo puede aprobar o reprobar, y el Sr. Barrera es de los que opinan que puede también modificar y adicionar. Cree que esta cuestión puede ser resuelta adelante. Explicó que la Ley Juárez es enteramente provisional e interina, que las materias que ella toca pueden ser resueltas por la Constitución, pero que su aprobación es necesaria para que el Congreso participe de la responsabilidad ante la opinión que ha contraído el gobierno y sostuvo que la supresión de los fueros, punto capital de la ley, debía sancionarse por el Congreso como la gran conquista de la revolución, deseada y anhelada por el pueblo.

El señor Castañeda declara: que opina en contra del dictamen tal cual está y espera que sus razones sean debidamente atendidas por el Congreso. Observa que la ley de que se ocupa el Congreso, entraña grandes cuestiones constitucionales que no pueden resolverse todavía. Le parece que en unas cosas vamos en México con demasiada precipitación, mientras en otras caminamos a paso de tortuga. La Ley Juárez es precipitada, en su concepto, porque tocó puntos que sólo puede resolver el Congreso al constituir a la Nación, tales como la extinción de fueros y la organización de la Suprema Corte. Resolver cuestiones no era propio de un gobierno provisional, tanto más, cuanto que la Constitución legítima de 1824, que no ha sido derrocada por el pueblo, respetó los

¹³ Sesiones de 21 y 22 de abril de 1856 del Congreso Constituyente.

fueros eclesiásticos y militares. El pueblo, en concepto del orador, aspira siempre a la Constitución de 1824: ve en ella la garantía de sus derechos y de su libertad, y lo que quiere la nación deben quererlo sus representantes. No puede admitir que el país haya vuelto al estado natural, que no haya leyes ni instituciones, pues esto conduce al más completo desquiciamiento de la sociedad; hay principios que deben salvarse, que deben conservarse, mientras otros no vengán a substituirlos legítimamente. Repitió que sí la Carta de 1824 respetó los fueros, se deben respetar hasta que se expida la nueva Constitución. Declaró que no entraba al examen de la cuestión de fueros y que estaba persuadido de que la asamblea era competente y tenía la autoridad necesaria para resolverla como lo creyera útil al país al dar la Constitución y no antes, lo cual será más conforme con el decoro y dignidad de la representación nacional. No se declara, pues, en contra de la medida: quiere sólo que se emplace para su debido tiempo.

En cuanto a la extensión de la facultad revisora, el señor Castañeda es del mismo sentir que el Sr. Barreda. Sostuvo muy bien que el Congreso puede modificar y adicionar las materias sujetas a su examen y que es indispensable salirse del sentido puramente literal de la palabra revisar para buscar su significación política. Expuso que en los tribunales la revisión importa modificación, y que otro tanto en los parlamentos divididos en dos cámaras. Según el Plan de Ayutla, creó el Sr. Castañeda que la revisión no excluye la modificación. Volviendo a ocuparse del dictamen, no está porque la aprobación que consulta la comisión sea tan general que recaiga en globo sobre una multitud de artículos, de los que muchos requieren maduro examen. En la alternativa en que la comisión pone al Congreso, de aprobar o reprobar toda la ley, cerrando la puerta a la discusión detenida de cada artículo, ve un acto antiparlamentario y poco razonable, que está en contra del reglamento. Aprobar la ley importa aprobar todas sus partes y esto no puede hacerse examinando sólo una proposición tan general. El Plan de Ayutla no pudo destruir estas prácticas parlamentarias, ni anular el reglamento de debates, y así desearía que la comisión insertara los artículos todos de la ley, como lo hacía la Cámara revisora en tiempos constitucionales. Todavía, para dar

mayor peso a estas razones, expuso el Sr. Castañeda que el Congreso debía examinar el acto del gobierno en el orden mismo en que el gobierno había procedido, es decir, parte por parte y artículo por artículo y nunca en globo, pues ni el Creador del Universo procedió así, sino ordenadamente, habiendo sido la creación una obra lenta y sucesiva.

Por todo esto creyó que no debía aprobarse el dictamen, y además, porque comprometería el orden de los debates y la dignidad del Congreso y anticiparía cuestiones que sólo la Constitución puede resolver. Pidió, por último, que el asunto volviera a la comisión.

Justo es reconocer en el Sr. Castañeda, que figura en primer término entre los amigos sinceros de la legitimidad y del orden constitucional, un fondo de excesiva buena fe en su oposición al dictamen y en su veneración al Código de 1824, Pero más teórico que práctico, se desatiende de los hechos que han venido a echar por tierra todas nuestras instituciones anteriores, e invocando los principios de una Constitución que dejó de existir llega, sin quererlo, a poner trabas a poderes que deben ser esencialmente reformadores sin detenerse en lo que fue lo pasado, sino examinando sólo las necesidades presentes y procurando mejorar el porvenir. De acuerdo con su señoría, en que el Congreso puede modificar y adicionar, creemos que en el caso presente, que es puramente político y de circunstancia, pues lo que está a discusión es la supresión de los fueros, el examen de la ley, artículo por artículo, gastaría inútilmente las fuerzas de la asamblea y retardaría la sanción de un principio que el pueblo acaba de conquistar a costa de su sangre.

El Sr. Jáquez presentó una proposición para que se suspendiera el debate hasta que esté a discusión la Constitución, Declaró que no era su ánimo oponerse al dictamen; reconoció que la Ley Juárez había introducido reformas conforme al espíritu de la Revolución de Ayutla, que acababan de ser consolidadas en Puebla. Pero creyó que hoy la discusión presentaba grandes inconvenientes que no especificó; juzgó mejor que el punto se discutiera cuando se examine el código político, para que no desde ahora se prevenga la resolución del Congreso; que la ley tiene grandes errores demostrados por la experiencia, pero tampoco los enunció. Como la ley es transitoria, no creyó que la aprobación de la

asamblea le diera más fuerza ni más prestigio. Aceptando la opinión de que la revisión excluye la modificación, supuso el caso de que fueran aprobadas ciertas partes de la ley, para lo cual era menester examinarlas detenidamente y creyó que no había tiempo para esto, siendo mucho más prudente la cuestión.

El Sr. Gamboa se levantó en contra de la proposición suspensiva. El Congreso, dijo, ha acordado la revisión preferente del acto que venimos examinando, y si después de este acuerdo suspende la discusión y emplaza la cuestión, incurre en una verdadera inconsecuencia. Dijo después que el punto que se discutía era la supresión de los fueros; que todo lo demás era secundario y el gobierno podría variarlo conforme a lo que resultara de la experiencia, y que si el Congreso comprendía la importancia política de sus actos, debía prescindir de examinar la ley artículo por artículo, sancionando la gran reforma democrática conquistada por la revolución.

Desechada la proposición suspensiva, casi por unanimidad, continuó el debate el Sr. Mariscal, individuo de la comisión, quien comenzó por expresar su sentir en la cuestión incidental de la extensión de la facultad revisora. El grande inconveniente que encuentra su señoría en admitir que el Congreso pueda modificar los actos del gobierno, consiste en que así legisla en los mismos puntos que el Ejecutivo y existen a la vez dos legisladores con igual suma de facultades, resultando leyes acaso contradictorias y una verdadera monstruosidad. Como el Congreso puede revisar no sólo las leyes sino los actos todos del Ejecutivo, si los modifica, el Sr. Mariscal teme que el Congreso se convierta en poder administrativo, en gobierno, lo cual sería otra monstruosidad: "El Congreso, dijo, se transformaría en convención y no necesito recordarle que no es su carácter".

A primera vista parecen de algún peso los argumentos del ilustrado miembro de la comisión; pero si se reflexiona que la monstruosidad y el conflicto que teme no pueden ocurrir, se ve que son demasiado débiles. La facultad revisora, comprenda o no la de modificar, tiene evidentemente mucho de legislativa, y si ella importa la reprobación de las leyes, habrá siempre dos legisladores, uno expidiéndolas y otro

derogándolas, pues la reprobación sería nula si no surtiere el efecto derogatorio. El Gobierno da una ley, el Congreso la reprueba o la modifica; sólo existe la resolución del Congreso, la ley primitiva queda revocada y así no hay monstruosidad ni conflicto, pues no existen dos leyes contradictorias.

Respondiendo al Sr. Castañeda y volviendo a lo substancial del dictamen, el Sr. Mariscal sostuvo que es tiempo de tratar de la cuestión de fueros, porque el acta está a revisión y no hay que retardarla después de haber sido acordada por el Congreso. La revisión es prudente y política, porque los fueros sirvieron de pretexto a la reacción, porque si la asamblea quiere afirmar el orden público y consolidar la libertad, está en el deber de hacer pedazos la bandera de la rebelión y de frustrar hasta las últimas esperanzas de los reaccionarios; es preciso que éstos sepan lo que tienen que aguardar del Congreso, fiel representante de los principios de la democracia. Manifestó que la cuestión no era nueva, no había precipitación en el modo de presentarla, no había diputado que no conociera la ley, y ha sido discutida bajo todos sus aspectos por la prensa y en círculos privados, hasta tal punto, que no había quien no pudiera votar conforme a su conciencia. El gobierno provisional al expedir esta ley no se arrogó facultades ajenas, porque las tenía amplísimas por el Plan de Ayutla; no anduvo impolítico ni imprudente al reformar la administración de justicia, como podía inferirse de algunas de las especien vertidas por el Sr. Castañeda, sino que, por el contrario, tenía el deber de atender a las circunstancias del país, a necesidades del momento, y no podía dejar subsistente la organización dictatorial sin falsear los principios revolucionarios. La Suprema Corte no podía existir como estaba... Después de una breve pausa, el orador dijo que abandonaba el examen de lo pasado, porque tendría que descender al terreno de las alusiones personales, lo cual sería contrario a su delicadeza, a la gravedad del asunto y a la dignidad de la asamblea.

Sostuvo que la aprobación podría ser general, en globo, como decían los impugnadores del dictamen, puesto que el mismo Congreso, al reglamentar su facultad revisora, había establecido que unas materias necesitaban detenida revisión y otra una muy ligera, dividiendo así las

cuestiones sujetas a su examen en principales y secundarias. Preguntó si sería conveniente, si sería útil para el país que se entablaran largas discusiones sobre los sueldos de los empleados del Poder Judicial; sobre si bastaban nueve días para el término de las demandas, y expuso que en la ley sólo había puntos de importancia política: la supresión de fueros; la organización de la Suprema Corte y de la Corte Marcial, y la creación del Tribunal Superior del Distrito; que si en artículos insignificantes se hacían supresiones, quedarían huecos, quedaría una ley informe e incompleta, graves dificultades y la necesidad de legislar puntos de importancia. Expuso que un acto debe estimarse no por su naturaleza intrínseca, sino por sus puntos principales; que la Ley Juárez, como obra humana, no está exenta de defectos; siendo evidente que había sido el primer paso para conquistar la igualdad social, el Congreso debía aprobarla para afirmar el principio democrático, El Sr. Mariscal estuvo feliz en su discurso y dio a la discusión el carácter político de que no debió apartarse.

El Sr. Escudero, previendo con razón que causaría extrañeza oírlo hablar en contra del dictamen, prometió explicar todas las consideraciones que lo movían a dar este paso. En su concepto, el dictamen peca por exceso y por defecto; por exceso al consultar la aprobación de la organización de los tribunales, particularmente la de los del Distrito, cuando sólo la Constitución resolverá lo que ha de ser esta parte de la República; opina que en todas estas cuestiones el examen no puede hacerse en lo general, sin en cada artículo y por esto pide que el dictamen vuelva a la comisión. Reconoce que la ley ha sancionado un gran principio, que ha sido un triunfo para la democracia, que ha establecido la verdadera igualdad; pero no obstante, cree que la comisión ha pecado por defecto al no suprimir el fuero eclesiástico en materia criminal, puesto que la supresión del tribunal mercantil, la supresión del fuero de guerra no son reformas, y en materia criminal la ley sólo hizo una amenaza, dijo que el fuero era renunciable, cuando su completa abolición es el verdadero progreso que anhela la sociedad.

En la aprobación general pedida por la comisión, ve el Sr. Escudero otro pecado de exceso y la mira de querer ganar ejecutoria para

los casos futuros. En cuanto a revisión, es del mismo parecer que el Sr. Castañeda; si hay en ella inconvenientes, si el Congreso tiene que intervenir en la administración, todo está dispuesto por el Plan de Ayutla. Cree que quien debe dar la Constitución es el Poder Legislativo, que es [quien debe] legislar, aprobar o reprobado, y por lo mismo, quien puede todo esto, puede modificar las materias sujetas a su examen. Comparó la revisión con las del foro y expuso los inconvenientes que resultarían de reprobado la ley, y son nada menos que dejar en vigor las disposiciones de Santa Anna sobre administración de justicia. Al prever resultado, dijo que si el Congreso podía adicionar y modificar, podría hacer males y no bienes. Buscando un término medio, propuso, como mejor partido, que la comisión se hubiese limitado a consultar la aprobación de la supresión de los fueros, dejando omiso todo lo demás, y así el Congreso tomaría su parte de responsabilidad en esta forma, sin dar lugar a que se le tachara: de precipitado, si aprobaba una ley sin examen detenido; de moroso, si se ocupaba de discutir multitud de artículos insignificantes, Creyó también que la aprobación del Congreso no era necesaria puesto que la ley está surtiendo sus efectos, lo cual no es muy exacto, pues hasta hace muy poco se publicó en Durango y en Veracruz, y en todas partes las resistencias se fundan en la esperanza de que el Congreso no la califique.

Con respecto a la carta de 1824, el Sr. Escudero, que es sin disputa consecuente federalista, no ve tan lejos como el Sr. Castañeda; reconoce que a ella aspira el pueblo, pero sólo por la forma de gobierno que ella establece y que esa aspiración no se extiende a todos los defectos de aquel Código y mucho menos a los fueros, pues acabamos de ver que siendo los fueros el estandarte de la reacción, contra ellos se alzó la república entera. Pidió que el dictamen volviese a la comisión para que lo reformara en el sentido que lo dejaba indicado. Se ve, pues, que la opinión del Sr. Escudero, no es contra la supresión de los fueros y, que en este particular, es todavía más avanzado que la Ley Juárez.

El Sr. Arriaga, que estaba en la lista de los que debían hablar en pro, habló en contra del dictamen, dijo que esto lo colocaba en una posición embarazosa. Las reformas introducidas por la Ley Juárez parecen a su señoría pequeñas, comparadas con las que desea para su

patria. No viene, pues, a atacarlas, y sólo tiene que combatir el modo en que se quieren aprobar. Le parece que se buscan inconvenientes, que desconfiamos de nosotros mismos, que nos falta fe en nuestras obras, que es extraño que hasta ahora sólo se revisen los actos de los nuestros, dejando intactos los ajenos, los monstruosos y absurdos de Santa Anna. Extraña que la revisión se detenga en actos buenos, entendiendo por buenos los que satisfacen las necesidades sociales y no encuentran resistencias legítimas. Siente que conquistada una reforma el partido liberal vuelva hacia atrás, vuelva a mares borrascosos donde aún brama la tempestad, y no le hace otra impresión este examen retrospectivo; siquiera la aprobación sea su principal objeto. Deplora que cuando ha triunfado un principio, cuando está ya sancionado por el pueblo, quiera el Congreso examinarlo, con lo que sólo logra hacer nacer la duda en los espíritus. Teme que este examen sea una rémora para el gobierno y que éste se detenga en la vía de la reforma, si la revisión ha de seguir a todos sus actos, y teme igualmente que las mejoras que se emprenden por el Ejecutivo, no tengan solidez ni estabilidad sino un carácter incierto y vacilante. Sabe que el pretexto contra la Ley Juárez, es que no la ha ratificado el Congreso; pero cree que ratificación debe ser tácita, dejando que subsista la ley. Quiere que el gobierno que se deriva del Plan de Ayutla tenga un poder amplísimo para marchar sin trabas por la vía de la reforma, y le parece que la revisión es para lo malo, para lo inmoral y no para lo bueno. Establece distinciones demasiado metafísicas entre el modo de revisar los actos de Santa Anna y los del gobierno actual, mereciendo los del primero, severo y detenido examen, y debiendo limitarse al de los del segundo a aquellos que no sean conformes con el espíritu de la revolución. Supónese el caso de que el Congreso no fuera eminentemente republicano y no estuviera dispuesto a ratificar la ley ¿qué sucedería con haber suscitado esta discusión? No ve en ella oportunidad, cree que la comisión puede retirar su dictamen y que la ley no necesita revisión, porque está ya aceptada, y lo que es más, defendida por el pueblo. Sienta como regla general, que está de más la revisión de actos que el pueblo aprueba y encuentra en los decretos aprobatorios del Congreso el inconveniente de la multiplicidad de leyes. Observa que la

aprobación que se pide viene después de la victoria, que tiene algo de espíritu de partido, que no importa ninguna novedad, pues después de que nuestros amigos han vertido su sangre y han triunfado en la campaña, les vamos a decir que combatían por una causa buena, que parecía que el Congreso esperó el éxito de la campaña para pronunciar su fallo y añadió que ya no debemos presentarnos como partidarios, sino como hombres de Estado, Amplió más estas ideas, sosteniendo que dejar subsistente la Ley Juárez, sin sujetarla a revisión, era más conforme con el prestigio del Congreso y dejaba expeditas las facultades del Ejecutivo, recomendando como necesaria la unión entre los dos poderes y creyendo que el país nada ganaría con la aprobación del Congreso en una materia que estaba ya aprobada por la opinión pública.

Algo de utopía hay en el discurso del Sr. Arriaga, quien tampoco combate la sustancia del dictamen. Sentimos no ser de su opinión en cuanto a la revisión por el Congreso de la Ley Juárez. La aprobación de la asamblea da más fuerza a la reforma, frustra toda esperanza en los reaccionarios y viene a ser una nueva prenda de unión entre los dos poderes, que su señoría desea subsista, como lo deseamos todos los liberales. Queremos que el gobierno esté expedito en sus facultades; pero caminará con mas seguridad y más firmeza si encuentra el apoyo de la representación nacional. Aunque la asamblea no es constitucional, el gobierno tiene que ser parlamentario y que contar con el concurso de la misma asamblea. Si guarda silencio en las cuestiones políticas de más gravedad, su silencio será muy elocuente, será una aprobación tácita; pero no es el papel que corresponde a los cuerpos deliberantes. El Plan de Ayutla no quiso la dictadura ilimitada ni para el bien y por eso sujetó los actos todos del gobierno a la revisión del Congreso, dando a esto una parte importantísima en la marcha de los negocios, a que no puede renunciar, pues de su revisión depende el crédito del gobierno. Por lo demás, la aprobación no viene después de la victoria dando a paso un sentido desfavorable; la mayoría del Congreso no necesita triunfar para dar a conocer sus principios y en la política no se triunfa sólo con ganar una batalla. La lucha sigue y seguirá todavía; la aprobación por el Congreso será un triunfo más.

El Sr. Villalobos, que pidió la palabra desde que se abrió la sesión, declaró que en parte había prevenido sus razones el Sr. Arriaga; sostuvo que la revisión debía hacerse por riguroso orden cronológico y que así aún no le llegaba su turno a la Ley Juárez. Oía decir que la ratificación daría fuerza y prestigio al gobierno y no sabía si los que tal opinaban se dejaban dominar por ilusiones, o si su señoría adolecía de alguna alucinación. No creía digno que el Congreso se estuviera ocupando de aprobar los actos del gobierno actual, porque las asambleas aprobantes se degradan. El orador citó con muy poca oportunidad al senado romano en tiempo de Augusto, que degeneró y se envileció adulando al dueño del mundo. El Sr. Villalobos sabe que no pertenece a una asamblea degradada y ha visto que casi por unanimidad se desechó el proyecto de ratificar el despacho de general de división del Presidente de la República. Cuando se trata del bien público, el Congreso está del lado del gobierno; pero conserva toda la dignidad que le corresponde.

El Sr. Villalobos aprueba la supresión del fuero, pero desea que este punto se reserve para cuando se trate de la Constitución. Si se aprueba la ley, ve aprobada la organización del tribunal superior del distrito, a riesgo de que otra cosa disponga la Constitución no se muestra muy amigo de esta medida y llega a comparar al distrito, si tiene autoridades propias, con la república de Marino y sostiene que esa organización particular conviene mejor a los territorios por la distancia. En cuanto a los tribunales de circuito y de distrito, cree que convenía el arreglo de la división territorial. Por fin, se esfuerza en demorar el asunto hasta que se discuta la Constitución y quiere librar al Congreso de la fea nota de los cuerpos aprobantes.

El Sr. Fuente, que ya en otros Congresos ha demostrado que tiene las principales cualidades del orador político; defendió el dictamen con bastante acierto, con mucho tacto, con admirable método y rebatiendo uno a uno a todos sus opositores. Explicó perfectamente las tendencias de la revolución de Ayutla, que no quiere una dictadura ilimitada ni en sus atribuciones ni en su duración y, que al establecer la revisión, devolvió el poder al pueblo y estableció la conveniente división de los poderes públicos. Fijó distinciones sobre el modo de ejercer la facultad revisora;

en cuanto a los actos de Santa Anna, como actos arbitrarios de un usurpador, como actos dañosos al país, el Congreso debía ver hasta dónde podía nulificarlos, destruirlos y salvar al país de sus funestas consecuencias; en cuanto a los actos de las administraciones Álvarez y Comonfort, como creadas por la nación, como legítimas y reparadoras, el Congreso debía ver hasta dónde podía conservar. La revisión, pues, en ciertas cuestiones y con respecto al gobierno que nació del plan de Ayutla, no tiene que pararse en minuciosidades, sino que el examen debe reducirse a si los actos han atacado a la moral o importan un gran detrimento para el país. Para discutir las leyes del Ejecutivo, artículo por artículo, no hay tiempo; examen minucioso daría al Congreso un poder legislativo secundario y así lo que tiene que rever son los grandes principios políticos y las reformas útiles y, como antes decía, evitar los ataques a la moral y los perjuicios a la pública. Querer, como el Sr. Castañeda, que se considere vigente la Constitución de 1824 es, en concepto del orador, desconocer la obra de las revoluciones y cerrar los ojos al cierto, aunque desgraciado, hecho de carecer el país de instituciones políticas. La supresión de los fueros no fue un ataque a aquella Constitución; fue sí, una medida necesaria., porque los fueros se convirtieron en poderosísimos auxiliares de la opresión y de la tiranía y, era preciso destruirlos para redimir a pueblo. Si el legislador debe conformarse con la opinión, también debe, en concepto del orador, marchar delante del pueblo y encaminarlo a la reforma. Al aprobar la medida no se obrará precipitadamente y se dará un nuevo apoyo al gobierno, afirmando su unión con el Congreso.

No encuentra espíritu de partido en la necesidad de examinar hechos que están más o menos de acuerdo con la opinión liberal. Demuestra que si en cuanto a la revisión, el dictamen puede contener algún error en la parte expositiva, esto en nada puede perjudicar a la parte resolutive, que se ocupa de una cuestión muy diversa, Cree que la revisión puede ejercerse en lo general; que en ciertas Constituciones las Cámaras revisoras aprueban y reprueban sin modificar y que esto sucedía en México en 1836.

Haciéndose cargo de las razones del Sr. Arriaga, el orador las encuentra insuficientes, no admite que la ratificación de la ley sea inútil, ni que se limite a aprobar lo aprobado ya por la nación. Cuenta que durante los reinados de Carlos IV y de Fernando VII fue cuando se dio inmensa extensión a los fueros, particularmente al de guerra; pero que entonces las testamentarias militares quedaron bajo la jurisdicción civil; que Santa Anna, yendo más lejos que aquellos monarcas, sujetó estas testamentarias a los tribunales militares, extendió el fuero general a las causas de ladrones, quitó al ciudadano la garantía de ser juzgado por jueces propios y estableció también para el delito de conspiración consejos de guerra; y que así el Congreso, al aprobar las reformas introducidas por la ley del Sr. Juárez reprobaba implícita, pero terminantemente, los errores y los abusos de la administración de Santa Anna, en lo relativo a la administración de justicia y que otro tanto sucedía acerca de los fueros eclesiásticos, que el dictador mantuvo para apoyar en ellos su dominación.

No cree, pues, con el Sr. Arriaga, que el Congreso pierda prestigio al ocuparse de estas cuestiones, sino todo lo contrario. No admite que sólo lo malo éste sujeto a revisión, pues para distinguir lo malo de lo bueno, se necesita previo examen. Si la reforma la quiere el pueblo, si está apoyada por la opinión, tanto mejor; el terreno está preparado y, el Congreso, por mismo, debe consolidar las reformas en favor de los buenos principios.

Continuando la discusión del dictamen sobre aprobación de la Ley Juárez, el Sr. Aguado habló en contra, no porque opine que el dictamen debe reprobarse, sino porque cree que la cuestión no se ha examinado desde su verdadero punto de vista. La ley no es general ni permanente; sólo algunos de sus artículos son para todo el país y toda ella tiene un carácter puramente transitorio; por tanto, el Congreso no debe examinarla en su totalidad y el gobierno puede introducir en ella las variaciones que juzgue convenientes. Se ha dicho que la ley conquista el principio de igualdad y que éste es el punto digno de aprobación, En sentir del Sr. Aguado, la ley aún no ha conquistado ese principio, es sólo el medio de llegar a él; la ley, al conceder el fuero criminal a los eclesiásticos, les ha

dato más de lo que antes tenían y así no se trata de la igualdad, sino de un principio más alto, importante la soberanía de la nación. Cuando se ha querido sostener que los fueros del clero son de origen divino, el gobierno de México los da en unas materias, los quita en otras, combate con hechos tan erradas doctrinas y así defiende las atribuciones del poder temporal, la independencia del sumo imperante para legislar en estos puntos y hacer el bien de la sociedad, siendo ésta la conquista de la ley y el medio de llegar a hacer efectiva la verdadera igualdad. Esto es lo merece aprobación, porque sanciona y defiende la soberanía nacional; esto es lo que debe aprobarse para salvar todo inconveniente y dar más fuerza al poder temporal.

El Sr. López (don Vicente) leyó un discurso que llevaba preparado, refutando las razones empleadas la víspera contra el dictamen. Estamos en contra de los discursos leídos, porque no pueden tener oportunidad, ni hacen impresión, ni son muy parlamentarios. Después de un modesto y meditando exordio, el Sr. López se declaró en favor del dictamen, aunque deseo algunas adiciones en la parte expositiva y propuso que en la resolutive se dijera que "se aprobaba la ley, entretanto se daba la Constitución", concepto que bien se sobreentiende. Entró en la historia de los privilegios otorgados a la Iglesia hace 16 siglos por los emperadores para librarla de persecuciones y de los ataques de la intolerancia; creyó que si cuando el martirio era la suerte deparada a los primeros cristianos, pudieron ser convenientes algunas concesiones, hoy, que por fortuna, el catolicismo se extiende con la civilización y profundamente arraigado en México, el clero no necesita privilegios que desequilibran la sociedad y tienden a que el sacerdocio, apartándose de su carácter sagrado, se sobreponga a las demás clases. Replicó en seguida al discurso el Sr. Arriaga desechando la doctrina de que los actos buenos del gobierno no necesitan revisión, por ser este concepto contrario a la letra del plan de Ayutla. Lo que podía para complacer al Sr. Arriaga, era que el acto pasara en votación económica como de escasa importancia; pero esto era contrario a la opinión de la prensa que lo había calificado de vital interés, fundándose en muy atendibles razones, lo que hacía que el Congreso no pudiera apartarse de esa opinión, refiriéndose el Sr. Escudero, se opuso al

de la ley, artículo por artículo, porque así el Congreso descendía a detalles administrativos, pudiendo quedar trunca la ley y poco expeditas las funciones del Ejecutivo. Concluyó pidiendo que se aprobara el dictamen y que la ley se examinara en su generalidad.

El Sr. Castañeda recordó que el día anterior se había fundado en dos razones principales para combatir el dictamen: primera, que la ley envolvía cuestiones constitucionales, cuya resolución no era oportuna todavía, y segunda, que la comisión consultaba la aprobación en lo general, lo cual es antirreglamentario, puesto que, conforme al reglamento, aun las simples proposiciones pueden dividirse en partes cuando abrazan diferentes resoluciones. Que a sus argumentos se contesta "lo bueno no necesita ratificación; la revisión es sólo para lo malo". ¿Se infiere de aquí, preguntó el orador, que lo malo no necesita enmienda? ¿Si hay defectos en una ley que contenga algo bueno, es justo, decoroso y conveniente que el Congreso pase por tales defectos? no y mil veces no, se respondió con vehemencia; el Congreso no debe envolverse en tales defectos. Estando vigente la ley, creyó que no era urgente aprobarla y que si se ha de examinar, la obra debe ser digna de la asamblea. No cree que de las modificaciones resulte que haya dos legisladores, pues entiende que el gobierno acatará las resoluciones del Congreso y que si algo existe de este inconveniente, la culpa es del plan de Ayutla, cuya defensa no es del caso emprender. Dijo que se hablaba de un punto prominente que se hacía consistir en la extinción de fueros, medida provisional que se pintaba como una panacea para todos los males públicos. Suponiendo que esto sea bueno, sobre lo que se reserva su opinión, no cree que a esto se debe sacrificar todo lo demás y pasar por cuantos defectos contenga la ley. Considerando como cuestión secundaria la organización judicial del distrito, se limitaba a puntos constitucionales, a la gravísima cuestión de si son preferibles los tribunales unitarios a los colegiados, cuestión que ocupa a todos los jurisconsultos y publicistas de todos los países civilizados; observó que en la Suprema Corte la ley establece una sala unitaria, resultando de aquí que el Presidente, los ministros, los diputados y altos funcionarios serán juzgados por salas unitarias, mientras los comandantes generales quedan

sujetos a tribunales colegiados, lo cual envuelve una inconsecuencia. Al aprobar disposiciones, el Congreso se expone a incurrir en una contradicción consigo mismo, pues está seguro de que la Constitución no las ha de resolver en el mismo sentido. Por todo esto creyó conveniente que la ley subsistiera como provisional, sin necesidad de revisión. Tampoco cree que la aprobación sirva de apoyo para el gobierno; sobre todo, cuando sabe que merece la confianza de la asamblea y de la nación entera. Creyó que si es conveniente abolir los fueros, llegará pronto la oportunidad de la medida, sin proceder con precipitación. La cuestión de fueros es gravísima, en concepto de su señoría, pues afecta mi más de la mitad de la nación; no hay que anticipar la resolución del Congreso, que debe venir después de una discusión detenida y concienzuda sobre fueros. Se habla mucho del triunfo de Puebla por el señor Presidente de la República y que se debe, entre otras cosas, a lo desatinado del plan reaccionario; pero, ¿quiere la nación que se conquisten principios a costa de torrentes de sangre? No, quiere reformar, pero de una manera pacífica y tranquila, su señoría entiende los verdaderos principios democráticos en conformarse hasta donde sea posible con la voluntad de la mayoría del pueblo y, en la cuestión de fueros hay que atender a las convicciones, a los deseos, a los hábitos, a las creencias de gran parte del pueblo. Aconseja a la asamblea que se abstenga de ocuparse del asunto o que declare el acto no revisable por ahora, de lo cual no puede originarse ningún trastorno ni ninguna duda, después de la publicidad que han tenido los debates. Se opone, sobre todo, a la aprobación sin examen y no encuentra comparación entre el caso presente y el decreto sobre Presidencia del Sr. Comonfort; pues entonces era indudable y patente la conveniencia pública de la medida. Si la comisión no consiente en retirar el dictamen, pide que se declare sin lugar a votar.

El Sr. Montes, ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, declaró que en muchas de las razones que quería exponer al Congreso, lo habían prevenido los representantes que habían defendido el dictamen; pero que tenía el deber de defender al gobierno del ilustre Gral. Álvarez del cargo de precipitación que se le había hecho por haber expedido la ley, por haber suprimido los fueros; cargo que también recaía sobre la

administración del Presidente sustituto, puesto que había sostenido enérgicamente el acto que se calificaba de precipitado. No pudo haber precipitación en una medida reclamada por la sociedad, no ahora, sino hace 60 años y por hombres cuya autoridad debía ser incontestable para los impugnadores del dictamen. Hace 60 años, dijo que el virrey, conde de Revillagigedo, en el informe que dejó a su sucesor, demostraba lo perjudicial de los fueros y pedía su restricción, como indispensable para el buen orden de la sociedad. Leyó el pasaje que citaba, que es un fundado y razonado ataque contra los fueros especiales, particularmente el eclesiástico. No es, pues, una idea nueva la de la Ley Juárez, ni hubo precipitación en expedirla, ni mucho menos en mantenerla después; lo único lamentable es, que hasta ahora se haya hecho efectiva esta reforma.

Apeló a la conciencia de uno de los impugnadores del dictamen, como abogado distinguido y experimentado, sobre lo que había sido la administración de justicia en los tribunales militares y eclesiásticos.

Después dijo que se había vertido una especie en la discusión, sobre la que el gobierno debía dar sinceras explicaciones para no coartar en lo más mínimo la libertad de la asamblea. Se ha supuesto que en el caso de ser aprobada la ley, quedará vigente la legislación dictatorial y tal temor no debe abrigarse en ningún caso, pues existen las leyes que arreglan la administración de justicia conforme a la carta de 1824, las leyes de 1837, las de 1812 y el gobierno escogerá las más convenientes, o expedirá otras nuevas para que nunca, ni por un momento, pesen sobre el país las disposiciones dictatoriales.

Sobre las dudas que se han suscitado cerca de la facultad revisora y su extensión, después de examinar el del plan de Ayutla y de la convocatoria, fundándose en la doctrina de que las leyes sólo pueden ser interpretada por quien las da, infirió que ni el Congreso, ni el Ejecutivo pueden dar hoy tal interpretación; pero que siendo el Sr. Comonfort quien modificó en Acapulco el plan de Ayutla. en el caso de que se le pidiera la interpretación, el país debía tener plena confianza en que diría la verdad sencilla el hombre que tanto ha hecho en favor de la libertad.

Prescindiendo de esta cuestión de derecho y limitándose a otra de hecho, observó que sí se pretendía revisar artículo por artículo la Ley

Juárez, había que seguir el mismo camino en todas sus referencias y así el Congreso emprendería la revisión de todo lo que la ley declaraba vigente, es decir, las leyes de 1837, de 1853, de 1834 y, además, el fuero gótico, el fuero juzgo, las de Toro, las siete partidas y, en fin, todos los códigos españoles, lo cual era de todo punto imposible.

Expuso que el gobierno no tiene ningún interés mezquino en exponer estos inconvenientes y que S. E. el Presidente le encargaba recomendar y suplicara a la asamblea, que se ocupara de expedir la Constitución que sería recibida por el jefe del estado como el símbolo del restablecimiento de la paz, como el fin de desastrosas revueltas y lo dejaría volver a la vida privada, que era todo su anhelo, después de ver al país firmemente constituido. Dio a esta recomendación el carácter de súplica y, al concluir, hubo estrepitosos aplausos en las galerías.

El Sr. Castañeda, creyéndose aludido por el ministro en lo relativo a los cargos de precipitación contra los gobiernos de los Sres. Álvarez y Comonfort, explicó que si al primero le había hecho esa imputación, de ninguna manera lo hacía extensiva al segundo, pues sabía muy bien las razones de política, de conveniencia y aun de necesidad que habían obligado al Sr. Comonfort a mantener la ley. Reconoció los eminentes servicios prestados al país por el Gral. Álvarez y por el gobierno actual; dijo que nada ofensivo había en sus palabras, puesto que el cargo de precipitación se fundaba en la opinión de que las cuestiones constitucionales no debían resolverse sino a su debido tiempo y en el hecho de que los fueros habían sido reconocidos por cuantas Constituciones han regido en la república; que esto era lo que había dicho y lo que sostiene, repeliendo el cargo de haber tachado de precipitado al Sr. Comonfort.

El Sr. Montes, ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, declaró que no había hecho alusiones a ninguno de los señores diputados; que conforme al reglamento no había citado nombre de persona determinada y sus palabras no habían tenido nada de agresivas, limitando su atención a sincerar al gobierno actual y al del Sr. Álvarez del cargo de precipitación al sostener y dictar una medida reclamada por el bien de la sociedad.

Añadió que al haber recomendado poco antes la pronta expedición de la Constitución, no se debía entender que el gobierno consideraba poco importante la revisión encomendada al Congreso, ni mucho menos que la administración actual trataba de esquivar el examen de sus actos, pues por el contrario lo deseaba; quería que la asamblea obrara con la mayor libertad y, tranquilo en su conciencia, le sería grato sujetarse al fallo de juez tan respetable.

El Sr. Moreno dio lectura a un discurso de varios pliegos, defendiendo el dictamen y combatiendo uno a uno a los impugnadores del día anterior, cuyas razones le parecieron no sólo insuficientes, sino contraproducentes. Dijo al Sr. Castañeda, que la carta de 1824 ya no existe, ni se puede invocar, ni ha de resucitar aunque se le aplique el galvanismo parlamentario; vio en los fueros lo contrario de la igualdad; sostuvo que ésta se deriva del cristianismo, cuyos puros principios ensalzó con entusiasmo. Dijo al Sr. Arriaga, que no hay el menor peligro en discutir una cuestión ganada por el pueblo contra los reaccionarios, que habrían reunido todas sus fuerzas y tenían dinero dado por el clero y que el Congreso no puede renunciar su facultad revisora, ni desprestigiarse al aprobar las reformas útiles; dijo al Sr. Villalobos que su desgraciada comparación con el senado romano del tiempo de Augusto, era de todo punto inaplicable al Congreso y se extendió bastante sobre este punto histórico; dijo al Sr. Escudero, que sí el dictamen pecaba por defecto, lo aceptaría así, sin ser demasiado avaro de mejoras y que cambiara de opinión; y, por último, dijo al Sr. Fuente palabras muy lisonjeras, declarando que si hubiera estado en la oposición, las razones del elocuente diputado de Coahuila lo hubieran hecho mudar de parecer.

Tenían pedida la palabra en pro del dictamen los Sres. Mata, Romero (don Félix), Degollado, García Anaya, Arias y Riva Palacio, y no había quien la tuviera en contra.

Declarado el punto suficientemente discutido, hubo lugar a votar por 71 señores contra 13.

Puesto el artículo a discusión en lo particular, el Sr. Castañeda pidió que se dividiera en partes. Más de 20 diputados pidieron a un tiempo la palabra. El Sr. Mariscal preguntó cuál era la división que

proponía el Sr., Castañeda y éste replicó, que la de todas las de la Ley Juárez. La mesa suplicó a la comisión, que se pusiera de acuerdo sobre admitir o no propuesta y el Sr., Mariscal dijo que el artículo era indivisible, que la comisión desechaba la idea del Sr. Castañeda, por las razones expuestas en el debate y porque como había dicho muy bien el señor ministro de Justicia, de esa división resultaría el examen de toda la legislación española.

El artículo que consulta la aprobación de la Ley Juárez, fue aprobado por 82 votos, contra uno, que fue el del Sr. Castañeda.

OFRECE EMPLEAR AL LITERATO
GRANADOS MALDONADO

Oaxaca, abril 24 de 1856

Señor don Matías Romero
México

Mí estimado amigo:

Aunque no conozco personalmente al Sr. Granados Maldonado, tenía ya noticias muy favorables de sus honrosos antecedentes y merito literario y esto persuadirá a usted lo satisfactorio que me seria ocuparlo en el servicio en este estado en alguno de los destinos públicos y, luego que se presente alguna oportunidad, la aprovecharé para obsequiar los deseos de usted; pero no puedo dar una resolución pronta sobre este negocio ya porque la provisión en los destinos no depende de mí exclusivamente, sino del consejo y en la propuesta en otras oficinas, y ya también porque en la actualidad todos los empleos de este estado están provistos, en cuyo concepto no me es posible fijar tiempo ni colocación en que deba ocupar los servicios del Sr. Maldonado, pues es cosa que requiere tiempo y oportunidad.

Agradezco a usted mucho el ejemplar que me remitió de los cantares de la melancolía, obra literaria del Sr. Maldonado que ocupará un lugar preferente en mi pequeña biblioteca.

Consérvese usted con buena salud y ordene cuanto guste a su afectísimo amigo y seguro servidor que b. s. m.

Benito Juárez

SON CORDIALES SUS RELACIONES CON EL
PRESIDENTE COMONFORT

México, abril 26 de 1858

Excelentísimo señor gobernador
don Benito Juárez
Oaxaca

Mi muy querido amigo:

Recomiendo a tu consideración a don Mariano Antonio Malvido, tanto por su persona, pues ha sido empleado honrado de la renta del tabaco, cuanto por los intereses que tiene a su cargo pertenecientes a la empresa.

Sin más asunto, me repito como siempre tuyo muy afecto amigo q.
b. t. m.

Ignacio Comonfort

RECOMIENDA A MATIAS ROMERO LE SIGA ENVIANDO
INFORMES DE LA CAPITAL

Oaxaca, mayo 8 de 1856

Señor don Matías Romero
México

Mi muy estimado amigo:

Recibí su grata en 3 del corriente que contesto diciéndole que como manifesté a usted en mi última, aprovecharé la primera oportunidad que se presente, para colocar al Sr. Granados Maldonado, que usted justamente me recomienda.

Agradezco a usted mucho las noticias importantes que me da y que aún no traen los periódicos lo que ciertamente les da más mérito y espero que me haga el favor de continuar comunicándome las que ocurran, y que me son sumamente útiles para mi gobierno.

Aquí seguimos disfrutando de paz, que yo procuro consolidar con la unión de todos los amigos de la libertad; y hasta ahora, tengo el gusto en que mis trabajos no son estériles.

Deseo a usted muy buena salud, y me repito su afectísimo y seguro servidor q. b. s. m.

Benito Juárez

LOS FUNCIONARIOS DEBEN MERECER LA CONFIANZA
PÚBLICA POR SU FE POLÍTICA, CONOCIMIENTOS
Y HONRADEZ

Oaxaca, mayo 18 de 1856

Señor don Matías Romero
México

Mi muy querido amigo:

Las novedades que usted me comunica en su grata del 13 del corriente, son de sumo interés y pueden traer resultados desfavorables a la marcha en nuestros negocios, aunque me consuela la consideración de que el Sr. La Rosa, con la sabiduría y acierto que acostumbra, sabrá hacer frente a las dificultades y salvarnos en cualquier borrasca que se presente.

Ahora lo que conviene es que haya la atingencia necesaria en reemplazar a los señores Payno y Yáñez con personas que merezcan la confianza pública por su fe política, por sus conocimientos en sus respectivos ramos y por su honradez. Este negocio tiene en expectativa a toda la nación y espero que usted oportunamente me participe lo que haya de positivo en el particular, para calcular si marchamos bien o mal.

Deseo a usted la mejor salud y me repito su amigo afectísimo y seguro servidor q. b. s. m.

Benito Juárez

SE LE COMUNICA LA RENUNCIA DEL GENERAL JUAN
ÁLVAREZ A LA PRESIDENCIA

México, mayo 24 de 1856

Excelentísimo señor don Benito Juárez
Oaxaca

Mi distinguido señor mío:

El acontecimiento del día y que llama ahora la atención general, es la renuncia que el general Álvarez: ha hecho de la Presidencia de la República ante el soberano Congreso, que se ocupa ahora de este importante negocio. Como no está previsto el caso en el plan de Ayutla, ofrece su resolución las más serias dificultades. Si se le admite la renuncia expira la misión de Comonfort que sólo es sustituto de la persona, y la ratificación del Congreso al decreto de su elección en nada altera esa cualidad. El caso es arduo en demasía, y estaré pendiente de la resolución que se le dé para comunicársela oportunamente a usted.

Ya sabrá usted que el Sr. Lerdo de Tejada sustituyó a Payno en el ministerio de Hacienda. Se dice que el Gral. Soto ha sido nombrado ministro de Guerra, aunque esto no se sabe todavía de una manera oficial. Orozco y Berra es ahora el oficial mayor de la secretaría de Fomento.

El Sr. Mora, ex ministro de la República en Bogotá, ha contado aquí que Santa Anna está construyendo en Curbaco un magnífico panteón, y que en el testamento que ya otorgó dispuso que precisamente se le entierre allí, en un lugar distinguido, mandando además expresamente que nunca se permita la exhumación de sus cenizas, cuando sus compatriotas los mexicanos se empeñen en conducir las aquí.

Acabo de saber empieza a tener sus diferencias el Congreso con el Presidente.

Matías Romero

(Incompleto)

JUAREZ COMENTA LA RENUNCIA DEL
GENERAL ÁLVAREZ

Oaxaca, mayo 29 de 1856

Señor don Matías Romero

Mi querido amigo:

Quedo impuesto de lo que pasa en ésa con motivo de la renuncia del Sr. Álvarez. La única medida que en mí concepto debe adoptarse para restablecer la calma y que la administración marche sin obstáculo, es no admitir la renuncia expresada, pues de otra manera comenzarán las cuestiones personales que pudieran exasperar los ánimos y traernos la división del partido liberal.

Don Santa Anna podía excusar la cláusula en que prohíbe se trasladen sus restos a esta república, pues creo que los mexicanos no se han de ocupar de tan insignificante negocio.

El estatuto se ha recibido aquí con el más profundo disgusto, porque establece la forma central en el gobierno de la república¹⁴. Quiera Dios que el Congreso expida cuanto antes la Constitución para que cesen tantas cuestiones desagradables.

Consérvese usted con buena salud y ordene cuanto guste a su amigo afectísimo y seguro servidor q. b. s. m.

Benito Juárez

¹⁴ Ya se dijo en la introducción de este capítulo que el estatuto era centralista y absorbente.

LA OBSERVANCIA DEL ESTATUTO ORGÁNICO REDUCIRÍA
A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS A PUPILAJE

Excelentísimo señor ministro de Gobernación
México

He recibido el estatuto que para la organización provisoria de la república se ha servido expedir el Excmo. señor Presidente; y en cumplimiento de mis deberes, ya como gobernante y ya como ciudadano, he creído que no correspondería a la alta confianza que he merecido a su excelencia [S. E.] y a los oaxaqueños, si me limitara a avisar el recibo de esa suprema disposición, sin exponerle francamente, por el respetable conducto de vuestra excelencia [V. E.] la opinión del estado sobre este punto, de la más grave importancia en la actual situación política del país.

Oaxaca, que desde 1823 fue uno de los primeros que proclamó la república federativa, ha procurado siempre que ha regido esa institución, cumplir con fidelidad los deberes que las leyes han impuesto a los estados, siendo su objeto constantemente conciliar los principios que miran a evitar la anarquía, conservando estrecho el lazo de la nacionalidad, con aquellas franquicias en su gobierno interior, que a la vez que le han permitido el pacífico desarrollo de sus elementos de progreso, en nada pudieran perjudicar la marcha regular y firme del gobierno nacional. No quiere el estado ni puede pretender el aislamiento, la independencia ilimitada de las localidades; porque está persuadido de que tal sistema nos conduciría a la disolución social, por la debilidad e impotencia de las partes; conoce bien que es necesario la uniformidad en ciertas la centralización en algunos puntos, para conservar el orden en la administración y dar respetabilidad a México; pero desea que esos principios que han de dar vigor al centro, se combinen con los que permiten alguna libertad a los estados en su gobierno interior, para

conseguir así el importante objeto de que las localidades tengan esos goces que les servirán para impulsar sus adelantos, sin que por esto se perjudique la unidad de la nación.

Y Oaxaca sobre este punto puede alzar su voz, para que llegue hasta el supremo magistrado de la república; porque habiendo, durante las épocas que han regido tales instituciones, dado una sana inteligencia a esa independencia local, llenado sus compromisos, hasta el grado de que al verificarse la revolución de Jalisco, de ingrato recuerdo, tenía adelantados más de \$60,000 por contingente y, sujetándose al centro en todo lo que prevenían las leyes, parece que tiene derecho a que se respeten sus franquicias, que a la vez de servirle para promover el progreso y bienestar de sus habitantes, en nada embarazan la marcha del gobierno nacional. Estos principios que aman y han sostenido los oaxaqueños en los campos de batalla que han hecho sucumbir algunas ilustres víctimas en los cadalsos como en 1836 en la Villa de Etla, han sido sancionados y reconocidos en el tan célebre plan de Ayutla, disponiendo que cada estado se organizase según su estatuto particular sirviéndole de base la unidad e indivisibilidad de la república.

Este gobierno, al elevar esta comunicación a V. E. no es que el eco fiel de la opinión pública del estado, que viendo que el estatuto orgánico provisional de la república, viene a destruir los intereses legítimos creados por la última revolución, teme por su porvenir y su progreso. Cierto es que como V. E. indica, el estatuto sólo regirá el tiempo que tarde en sancionarse la Constitución, pero siendo éste tan corto, según todas las probabilidades, por estar ya concluido el proyecto, sería más conveniente conservar la organización que hoy tienen los estados, como emanación legítima del plan de Ayutla, única ley fundamental de México, mientras el soberano Congreso no expide el código constitucional.

El estatuto orgánico contiene algunas prevenciones, por las que centralizándose puntos de muy secundaria importancia, se impide a los estados su libre administración, contra lo dispuesto en el plan de Acapulco, que quiso que cada estado se rigiese por su estatuto provisional. Y ¿cómo podría tener esto efecto, según el estatuto general,

si para disponer la apertura de un camino, para fomentar la enseñanza, para crear establecimientos de beneficencia, para reglamentar las municipalidades, cuidar de la salubridad pública, aprobar los gastos municipales y los contratos de estas corporaciones, si para todas estas cosas hay necesidad de ocurrir al centro, como previene el artículo 118, para que resuelva lo conveniente? Y ¿cómo podría conservar la tranquilidad pública, si cuando con ese fin es necesario expedir órdenes por escrito, se ordena por el artículo citado que se ocurra a México para que se resuelva lo conveniente? ¿Acaso las emergencias del momento permiten esas dilaciones? Y si tal es la sujeción en materias tan secundarias ¿que comentarios no podrían hacerse respecto a rentas y a la fuerza pública, cuando en algunos artículos se indica ya cuál sería la situación de los estados?

La observancia literal del estatuto, por los inconvenientes indicados, reduciría a los gobiernos de los estados a un pupillage más estrecho todavía del que sufrieron por las leyes que más han favorecido la centralización del poder público; y Oaxaca no puede creer que el ilustre magistrado que tantos días de gloria ha dado a la república, combatiendo por la libertad de su patria, quiera volver a la nación al estado miserable de que la sacaron sus generosos esfuerzos.

Por tales consideraciones, este gobierno, siguiendo el parecer unánime del Excmo. consejo del estado, que en copia tengo la honra de acompañar a V. E. ha determinado representar manifestando las razones que le asisten para que el Excmo. señor Presidente se sirva mandar que el estado de Oaxaca se rija por su estatuto particular, hasta que se publique la Constitución, por ser aquél una emanación legítima del plan de Ayutla, que garantizó su existencia y es la ley fundamental de la nación, y en virtud de la que los estados se dieron sus respectivos estatutos, por los que se han regido hasta la fecha.

El gobierno de Oaxaca, que conoce bien el patriotismo y sanas ideas del Excmo. señor Presidente, no duda que S. E. procediendo de conformidad con el voto público, accederá a esta demanda, que no lleva más fin que el noble objeto de que por el bien cíclica la paz, la cosa pública continúe como hasta aquí, mientras el soberano Congreso expide el

código fundamental. Esta organización provisoria, emanada del plan de Ayutla, ha demostrado la experiencia que es bastante para conservar el orden interior, puesto que sus enemigos, haciendo un poderoso empuje, han sido impotentes para derribarla.

Sírvase V. E. elevar esta representación al Excmo. señor Presidente, recomendándole su favorable despacho, y aceptar a la vez las seguridades de mi respetuosa consideración.

Dios y Libertad. Oaxaca, junio 1 de 1856.

Benito Juárez

LIBRE TRÁNSITO POR EL ESTADO DE OAXACA

Señores gobernadores de los Departamentos:

Circular no. 39.- Considerando el excelentísimo señor gobernador que conforme al espíritu reparador del plan de Ayutla, deben desaparecer todas las restricciones y vejaciones inútiles establecidas por la tiranía para oprimir al ciudadano; se ha servido disponer que vuestra señoría [V. S.] permita que transiten libremente por ese departamento todos los que quieran viajar, sin necesidad de pasaporte; cuyo sistema quedará abolido desde hoy, salvo en el caso en que el interés público demande algunas medidas precautorias.

Y al comunicarlo a V. S. de orden de su excelencia le reitero las consideraciones de mi aprecio.

Dios y libertad. Oaxaca, mayo 15 de 1856.

(Manuel) Dublán

Son copias que certifico,- Oaxaca, Mayo 17 de 1856.

Justo J. Benítez

LAFRAGUA DESCRIBE LA SITUACIÓN DEL PAÍS

Correspondencia particular
del ministro de Gobernación

México, junio 3 de 1856

Excelentísimo señor don Manuel Doblado
Guanajuato

Muy estimado amigo y compañero:

Por encargo del señor Presidente y en propio nombre voy a escribir a usted sobre algunos puntos graves que llaman la atención y que es preciso que usted conozca a fondo.

La cuestión (de) Coahuila, que puede afectar en mucho la marcha del gobierno, no es una cuestión personal. Es un negocio del cual depende en gran manera el bien público, porque si el gobierno consiente la anexión, no puede mañana negarse a las pretensiones del estado de Iturbide, de Yucatán, de Cuernavaca y Cuautla, de la sierra gorda y de otras partes donde han surgido mil dificultades locales ya para unión, ya para separación de algunos pueblos. Fácilmente comprenderá usted cuántos embarazos nos traería la resolución de estos negocios en los momentos en que va a presentarse el proyecto de Constitución, que es en el que deben decidirse definitivamente todos puntos.

El decreto del consejo es una cuestión verdaderamente incidental, que las pasiones han explotado presentándola como vital, cuando en verdad no vale nada. Después de la protesta que los consejeros hicieron contra la elección del Sr. Comonfort, nadie puede, en justicia, obligarle a conservar ese personal. Y esto no es por las personas en sí mismas, pues

todas han obtenido puestos públicos bajo esta administración, siendo entre otros muy notables los casos de Cendejas y (Ramón I.) Alcázar, que siguen en los ministerios, esto es, en puestos de confianza. Pero el consejo, como estaba, no debía continuar y, siendo, si no necesaria, a lo menos conveniente, su reunión se dispuso complementarlo. La elección habrá sido más o menos acertada; más este punto está concluido con la renuncia que la mayor parte de los nombrados han hecho; de manera que quedan cuatro o cinco, de los que menos llamaron la atención. Los conservadores han atizado la discordia con todo el empeño que acostumbran y hasta cierto punto lo han logrado. Pero poco a poco se van calmando los ánimos y yo espero que pronto cesara el disgusto del todo.

El estatuto ha sido también objeto de imputaciones calumniosas. El buen juicio de usted comprenderá que en las circunstancias no hemos podido hacer más. Derechos y garantías con toda franqueza declarados; responsabilidad ministerial, que no existía, según el plan de Ayutla; restricciones al poder en cuanto ha sido compatible con la dictadura que, queramos o no, tenemos que ejercer, y atribuciones fijas de los estados. He aquí el estatuto: ningún principio antiliberal contiene; por el contrario, se han establecido todos los que forman la esencia del sistema liberal. Sobre religión nada hablamos, porque no quisimos preocupar una cuestión que debe decidir el Congreso. Con todo, esa misma omisión ha sido un adelanto, porque hoy nadie puede decir que hay intolerancia en la república, y esto siempre es un paso, y no corto, en el sendero del progreso.

En cuanto a las facultades de los gobernadores, usted conocerá que no siendo este gobierno una federación, sino una dictadura, no ha sido posible hacer más. De otra suerte, el gobierno general quedaría reducido a nulidad y de hecho habríamos resuelto la cuestión constitucional.

Por otra parte, teniendo, como la tienen y deben tenerla todos los gobernadores, una confianza plena en el señor Presidente, no pueden dudar de que su empeño principal es hacer el bien común y en particular el de cada uno de los estados. Usted nos conoce bien y sabe que si erramos, porque somos hombres, deseamos acertar como mexicanos y estamos íntimamente convencidos de que hoy, más que nunca, importa

hacer algo bueno, porque quizá será la última prueba a que la providencia sujeta a la nación.

Crea usted, por lo mismo, que el estatuto, en nuestro concepto, debe ser la norma segura para el gobierno general y los locales y que al expedirlo hemos tenido, sobre todo, la noble intención de que esta sociedad, tan trabajada por las revoluciones, viera que esta vez no se hacían ilusorias las promesas.

En fin, como el estatuto es provisional, sean cuales fueren sus defectos, el mal durará muy poco y la Constitución vendrá pronto a ponernos a todos en el sendero legal.

Lo más grave que hoy tenemos y ante lo cual deben desaparecer consejos y estatutos, es la probable guerra con España. El nuevo ministro viene con impresiones muy desfavorables y, aunque hasta ahora nada oficial tenemos, parece muy probable que no lleguemos a entendernos. Puede usted estar seguro de que primero dejaremos, no el puesto, sino la vida, que consentir en la humillación de nuestra patria. Cuanto aconseje la prudencia lo haremos; pero haremos también cuanto exijan la dignidad y los intereses de la nación. Muy sensible nos será entrar en una lucha con España; pero no la esquivaremos si se nos obliga y poniéndonos en manos de Dios y fiados en la justicia, seguiremos, sin vacilar, el camino del honor. Tal vez dentro de pocos días instruiré a usted de algo más positivo en este asunto; entretanto, será bueno que piense usted en los medios más a propósito para resistir con buen éxito, porque debemos estar preparados para todo.

Consérvese usted sin novedad y mande a su afectísimo amigo y servidor, q. b. s. m.

José María Lafragua

ESCUADRA ESPAÑOLA AMENAZANTE

Oaxaca, junio 5 de 1856

Señor don Matías Romero

Mi querido amigo:

Aunque el negocio de la venida del ministro español con una escuadrilla es alarmante y de mucha gravedad sin embargo, pienso que todo quedará terminado a la primera insinuación seria que haga nuestro gobierno, porque esa manera de presentarse el ministro español es tan desusada, tan injusta y tan ridícula, que es imposible que la pueda sostener ante un gobierno que no es ciertamente de hotentotes.

Mucho celebro que hayan terminado las diferencias que se habían suscitado entre el Congreso y el gabinete, pues así éste no tendrá embarazos para tratar los negocios graves que llaman su atención.

Espero que la cuestión que los estados deben iniciar, como ya lo ha hecho el nuestro por mi conducto, sobre la insubsistencia del estatuto¹⁵ que ha publicado el gobierno, pues no creo que este tenga interés en contrariar las justas exigencias de los estados.

Aquí no hay novedad. Deseo que se encuentre usted en buena salud y que ordene lo que guste a su amigo afectísimo y seguro servidor q. b. s. m.

Benito Juárez

¹⁵ Ya se indicó que el gobierno de Oaxaca hizo una representación pidiendo la derogación del estatuto, lo que de hecho se logró al no aplicarlo el gobierno de Comonfort.

ESTABLECIMIENTO
DE UNA CASA DE MONEDA EN OAXACA

Excelentísimo señor ministro de Hacienda
México

Excmo. señor:

Por un aviso publicado por ese ministerio, he visto que se convocan postores para celebrar un nuevo arrendamiento de la casa de moneda de esa capital, por estar ya próximo el fin de la anterior contrata. En bien del estado de Oaxaca creo oportuno dirigir a vuestra excelencia [V. E.] esta representación, con el importante objeto de ver si hoy que el poder supremo es ejercido por personas celosas por los adelantos del país, puede conseguirse que a Oaxaca se le permita el establecimiento de una casa de moneda, mejora por la que ha trabajado hace mucho tiempo, porque la ha considerado necesaria para dar vida a los diversos ramos de su riqueza.

Desde 1824 se solicitó la creación del establecimiento referido, en 1835 volvió a tocarse el proyecto que no ha podido llevarse a cabo por nuestras continuas revueltas, no obstante que en 1840 se trató con el mayor interés el negocio por las autoridades que funcionaban en aquella época. Al fin, en tiempo del gobierno provisional, cediéndose a las justas y repetidas solicitudes de Oaxaca, se le concedió por decreto de 16 de julio de 1842, el establecimiento de la casa de moneda, por cuenta del gobierno o por la empresa, creyera más conveniente, en consideración, según se expresa en el mismo decreto, al estado decadente de la riqueza, a la paralización de los giros, a la nulidad a que estaba reducido el importante artículo de la grana y a los crecidos en la explotación, aumentados por la demora consiguiente en la amonedación de los

metales. Debía ya, en cumplimiento del decreto referido, establecerse la casa de moneda, cuando una nueva revuelta, origen siempre de nuestros males públicos, vino a impedirlo; hasta que en 1849 el estado, contando con sus propios recursos y conociendo la urgente necesidad de reanimar la minería, por el abatimiento a que había llegado el ramo de la grana y considerando los que traería la realización del proyecto, objeto de sus continuos afanes, determinó llevarlo adelante por su propia cuenta, con la intervención consiguiente que la ley da al gobierno general sobre punto.

Más cuando Oaxaca creía tocar el término tan deseado de este negocio, se le previno por el ministerio que hoy es al digno cargo de V. E. por resolución de 5 de enero, que no podía permitirse el establecimiento de la casa de moneda, porque la condición XVIII de la contrata que celebró el gobierno para el arrendamiento de la casa de la capital, prohibía que se permitiera el establecimiento de otra en el radio de 150 leguas. Este privilegio concedido a una compañía, vino a arrebatar al estado las fundadas esperanzas que había concebido de mejorar la decadente situación a que lo había conducido el abatimiento general de todos los ramos de la riqueza pública.

Hoy las circunstancias son las mismas y estando para concluir la contrata que impidió a Oaxaca el establecimiento de la casa de moneda, que le fue concedido por diversas leyes, este gobierno se dirige a V. E. para que sirviéndose elevar esta comunicación al Excmo. señor Presidente de la República. Su excelencia en consideración a las razones expuestas y a que el interés y la conveniencia pública demandan imperiosamente una medida protectora para el estado, que impulse sus diversos ramos y especialmente el importante de la minería, se digne resolver que se lleve adelante el decreto de 16 de julio de 1824 y sus posteriores relativos, expedidos por la honorable legislatura del estado, que determinaron la creación de la casa de moneda, expresando los términos en que debiera plantearse tan importante establecimiento.

Esta ocasión me proporciona la de protestar a V. E. las seguridades de mi respetuosa consideración.

Dios y Libertad. Oaxaca, junio 7 de 1856.

Benito Juárez

OPTIMISMO DE JUÁREZ
FRENTE A LAS DIFERENCIAS CON ESPAÑA

Oaxaca, junio 15 de 1956

Señor don Matías Romero

Mi querido amigo:

Por haber estado muy ocupado el día de la salida del correo anterior no contesté su grata de fecha 7. Lo hago ahora agradeciéndole la noticia que me da del estado que guarda el negocio de las diferencias entre España y nuestra nación. Tengo esperanza de que este asunto se arregle sin necesidad de recurrir a las armas, pues no creo que la España cuente con elementos suficientes para hacernos la guerra con buen éxito. Sin embargo, usted, que está cerca de la fuente, podrá decirme lo que vaya ocurriendo de cierto para mi gobierno.

Seguramente las multiplicadas atenciones del Sr. de la Rosa no le han permitido contestarme la carta que usted le entregó, pues tengo certeza de no haber recibido contestación. Sin embargo registraré mi correspondencia atrasada y si encontrara la carta del Sr. de la Rosa se la remitiré a usted.

Deseo que se conserve usted con buena salud y que ordene lo que guste a su amigo afectísimo y seguro servidor q. b. s. m.

Benito Juárez

CONFIA QUE LOS DIPUTADOS CONSTITUYENTES
TRABAJEN CON DILIGENCIA

Oaxaca, junio 21 de 1856

Señor don Matías Romero

Mi muy querido amigo:

Agradezco a usted mucho la noticia que me da, no sólo de la presentación del proyecto de Constitución, sino de los puntos principales que contiene y que son sumamente interesantes. Falta ahora que los diputados abandonen su táctica de comenzar su trabajo al medio día, para que cuanto antes se dé esa Constitución que ahora está en proyecto, a fin de que la revolución termine y comencemos a disfrutar de la paz que tanto necesitamos para ser felices.

El negocio de la convención se arreglará, según presumo, sin necesidad de recurrir a las armas.

Aquí no hay novedad. Consérvese usted con buena salud y ordene lo que guste a su amigo afectísimo y seguro servidor q. b. s. m.

Benito Juárez

LA LEY DE DESAMORTIZACION CONSTITUYE UNA
VERDADERA REVOLUCION

Ministro de Fomento

México, junio 25 de 1856

Reservada

Excelentísimo señor licenciado don Manuel Doblado
Guanajuato

Manuel siempre querido:

Por mil consideraciones que no se ocultarán a tu buen sentido y a tus ideas de progreso radical y bien entendido, hemos acordado en el gabinete una ley de desamortización de la propiedad raíz de toda de comunidades, corporaciones, etcétera, con la que se hará indudablemente en el país una verdadera revolución, convirtiendo de la noche a la mañana en propietarios a los que no lo son y trayendo consigo otras consecuencias de un valor incalculable.

La ley te irá por el próximo correo; pero antes he querido prepararte para que tomes tus providencias, a fin de conservar quieta a esa gente de bonete y para que sepas que el ministerio de Hacienda podrá proporcionar 600 u 800 pesos con objeto de que dos muchachos, como Ayala y Gazca, o cualesquiera otros, escriban en combinación contigo popularizando la ley y sosteniéndola por tres o cuatro meses, que será el tiempo preciso para que se ponga en ejecución.

Si logramos esto, habremos hecho un inmenso bien al país, si no, caeremos; pero caeremos por algo que valga la pena y no por cuestiones

ruines y bastardas, y aun cayendo, dejaremos la simiente del bien, que en lo sucesivo podrá germinar. Pero para esto, como para todo, necesitamos tu franca cooperación, y al gabinete no he vacilado momento en asegurarla. Avísame por el próximo correo cómo y a favor de quién o de quiénes gira el ministerio de Hacienda.

Estos locos del Congreso siguen con sus tonterías; sin embargo. creo que entrarán en juicio al ver esa ley, que ellos, con todas sus charlatanerías y con sus gritos, no serían capaces de dar, porque su ciencia toda se reduce a la lengua.

Vidaurrea sigue preparándose... Guadalajara *idem*...

Tuyo, como siempre.

Manuel Siliceo

LEY DE DESAMORTIZACIÓN DE BIENES DE LA IGLESIA Y DE CORPORACIONES

Ministerio de Hacienda

El Excelentísimo señor Presidente sustituto de la República, se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

Ignacio Comonfort, Presidente sustituto de la República Mexicana, a los habitantes de ella, sabed:

Que considerando que uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y engrandecimiento de la nación es la falta de movimiento o libre circulación de una gran parte de la propiedad raíz, base fundamental de la riqueza pública y en uso de las facultades que me concede el plan proclamado en Ayutla y reformado en Acapulco, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo 1º.- Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen o administran como propietarios las corporaciones civiles o eclesiásticas de la república, se adjudicarán en propiedad a los que las tienen arrendadas, por el valor correspondiente a la renta que en la actualidad pagan, calculada como rédito al 6% anual.

Artículo 2º.- La misma adjudicación se hará a los que hoy tienen a censo enfiteútico fincas rústicas o urbanas de corporación, capitalizando al 6% el canon que pagan, para determinar el valor de aquéllas.

Artículo 3º.- Bajo el nombre de corporaciones se comprenden todas las comunidades religiosas de ambos sexos, cofradías y archicofradías, congregaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos,

colegios y, en general, todo establecimiento o fundación que tenga el carácter de duración perpetua o indefinida.

Artículo 4º.- Las fincas urbanas arrendadas directamente por las corporaciones a varios inquilinos, se adjudicarán, capitalizando la suma de arrendamientos a aquel de los actuales inquilinos que pague mayor renta y, en caso de igualdad, al más antiguo, respecto de las rústicas que se hallan en el mismo caso, se adjudicará a cada arrendatario la parte que tenga arrendada.

Artículo 5º.- Tanto las urbanas como las rústicas que no están arrendadas, a la fecha de la publicación de esta ley, se adjudicarán al mejor postor, en almoneda que se celebrará ante la primera autoridad política del partido.

Artículo 6º.- Habiendo fallos ya ejecutoriados en la misma fecha para la desocupación de algunas fincas, se considerarán como no arrendadas, aunque todavía las ocupen de hecho los arrendatarios; pero éstos conservarán los derechos que les da la presente ley, si estuviere pendiente el juicio sobre desocupación. También serán considerados como inquilinos o arrendatarios, para los efectos de ley, todos aquellos que tengan contratado ya formalmente el arrendamiento de alguna finca rústica o urbana, aun cuando no estén todavía de hecho en posesión de ella.

Artículo 7º.- En, todas las adjudicaciones de que trata esta ley, quedará el precio de ellos impuesto al 6% anual y a censo redimible sobre las mismas fincas, pudiendo cuando quieran los nuevos dueños redimir el todo o una parte que no sea menor de \$1,000, respecto de fincas cuyo valor exceda de \$2,000, y de \$250 en las que bajen de dicho precio.

Artículo 8º.- Sólo se exceptúan de la enajenación que queda prevenida, los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto del instituto de las corporaciones, aun cuando se arriende alguna parte, no separada de ellos, como los conventos, palacios episcopales y municipales, colegios, hospitales, hospicios, mercados, casas de corrección y de beneficencia. Como parte de cada uno de dichos edificios, podrá comprenderse en esta excepción una casa que esté unida

a ellos y la habiten por razón de oficio loa que sirven al objeto de la institución, como las de los párrocos y de los capellanes de religiosas. De las propiedades pertenecientes a los ayuntamientos, se exceptuarán también los edificios, ejidos y terrenos destinados exclusivamente al servicio público de las poblaciones a que pertenezcan.

Artículo 9º.- Las adjudicaciones y remates deberán hacerse dentro del término de tres meses, contados desde la publicación de esta ley, en cada cabecera de partido.

Artículo 10.- Transcurridos los tres meses sin que haya formalizado la adjudicación el inquilino arrendatario, perderá su derecho a ella, subrogándose en su lugar con igual derecho el subarrendatario o cualquiera otra persona que en su defecto presente la denuncia ante la primera autoridad política del partido, con tal que haga que se formalice a su favor la adjudicación dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la denuncia. En caso contrario o faltando ésta, la expresada autoridad hará que se adjudique la finca en almoneda al mejor postor.

Artículo 11.- No promoviendo alguna corporación ante la misma autoridad, dentro del término de los tres meses, el remate de las fincas no arrendadas, si hubiere denunciante de ellas se les aplicará la octava parte del precio, que para el efecto deberá exhibir de contado aquel en quien finque el remate, quedando a reconocer el resto a favor de la corporación.

Artículo 12.- Cuando la adjudicación se haga a favor del arrendatario, no podrá éste descontar del precio ninguna cantidad por guantes, traspaso o mejoras y cuando se haga a favor del que se subroga en su lugar, pagará de contado al arrendatario tan sólo el importe de los guantes, traspaso o mejoras que la corporación le hubiere reconocido precisamente por escrito de la publicación de ley; quedando en ambos casos a favor de aquélla todo el precio, capitalizada la renta actual al 6%. En el caso de remate al mejor postor, se descontará del precio que ha de quedar impuesto sobre la finca lo que deba pagarse al arrendatario por estarle reconocido en la forma expresada.

Artículo 13.- Por la deuda de arrendamientos a la adjudicación, podrá la corporación ejercitar sus acciones conforme a derecho común.

Artículo 14.- Además, el inquilino o arrendatario deudor de rentas no podrá hacer que se formalice a su favor la adjudicación sin que (quede) liquidada antes la deuda con presencia del último recibo o lo pague de contado o consienta en que se anote la escritura de adjudicación, para que sobre el precio de ella quede hipotecada la finca por el importe de la deuda, entretanto no sea satisfecha. Esta hipoteca será sin causa de réditos, salvo que, prescindiendo la corporación de sus acciones para exigir desde luego el pago, como podrá exigirlo aun pidiendo, conforme a derecho, el remate de la finca adjudicada, convenga en que por el importe de la deuda se formalice imposición sobre la misma finca.

Artículo 15.- Cuando un denunciante se subrogue en lugar del arrendatario, deberá éste, si lo pide la corporación, presentar el último recibo, a fin de que habiendo deuda de rentas, se anote la escritura para todos los efectos del artículo anterior. Entonces podrá el nuevo dueño usar también de las acciones de la corporación para exigir el pago de esa deuda. Más en el caso de remate al mejor postor, no quedará por este título obligada la finca.

Artículo 16.- Siempre que no se pacten otros plazos, los réditos que se causen en virtud del remate o adjudicación, se pagarán por meses vencidos en las fincas urbanas y por semestres vencidos en las rusticas.

Artículo 17.- En todo caso de remate en almoneda se dará fiador cie los réditos y también cuando la adjudicación se haga en favor del arrendatario o de quien se subrogue en su lugar, si aquél tiene dado fiador por su arrendamiento, pero no en caso contrario.

Artículo 18.- Las corporaciones no sólo podrán conforme a derecho cobrar los réditos adecuados, sino que llegando a deber los nuevos dueños seis meses en las fincas urbanas y dos semestres en las rústicas, si dieren lugar a que se lea haga citación judicial para el cobro y no tuviesen fiador de réditos, quedarán obligados a darlo desde entonces, aun cuando verifiquen el pago en cualquier tiempo después de la citación.

Artículo 19.- Tanto en los casos de remate como en los de adjudicación a los arrendatarios o a los que se subroguen en su lugar y en

las enajenaciones que unos u otros hagan, deberán los nuevos dueños respetar y cumplir los contratos de arrendamiento de tiempo determinado, celebrados antes de la publicación de esta ley; y no tendrán derecho para que cesen o se modifiquen los de tiempo indeterminado, sino después de tres años, contados desde la misma fecha. Cuando la adjudicación se haga a los arrendatarios, no podrán modificar dentro del mismo término los actuales subarriendos que hubieren celebrado. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio del derecho para pedir la desocupación por otras causas, conforme a las leyes vigentes.

Artículo 20.- En general, todos los actuales arrendamientos de fincas rústicas y urbanas de la república, celebrados por tiempo indefinido, podrán renovarse a voluntad de los propietarios, después de tres años, contados desde la publicación de esta ley; desde ahora para lo sucesivo se entenderá siempre que tienen el mismo término de tres años todos los arrendamientos de tiempo indefinido, para que a ese plazo puedan libremente renovarlos los propietarios.

Artículo 21.- Los que por remate o adjudicación adquieran fincas rústicas o urbanas en virtud de esta ley, podrán en todo tiempo enajenarlas libremente y disponer de ellas como de una propiedad legalmente adquirida, quedando tan sólo a las corporaciones a que pertenecían los derechos que conforme a las leyes corresponden a los censualistas por el capital y réditos.

Artículo 22.- Todos los que en virtud de esta ley adquieran la propiedad de fincas rústicas, podrán dividir los terrenos de ellas, para el efecto de enajenarlos a diversas personas, sin que las corporaciones censualistas puedan oponerse a la división, sino sólo usar de sus derechos para que se distribuya el reconocimiento del capital sobre las fracciones, en proporción de su valor, de modo que quede asegurada la misma suma que antes reconocía toda la finca.

Artículo 23.- Los capitales que como precios de las fincas rústicas o urbanas queden impuestos sobre ellas a favor de las corporaciones, tendrán el lugar y prelación que conforme a derecho les corresponda entre los gravámenes anteriores de la finca y los que se le impongan en lo sucesivo.

Artículo 24.- Sin embargo de la hipoteca a que quedan las fincas rematadas o adjudicadas por esta ley, nunca podrán volver en propiedad a las corporaciones, quienes al ejercer sus acciones sobre aquéllas, sólo podrán pedir el remate en almoneda al mejor postor, sin perjuicio de sus derechos personales contra el deudor.

Artículo 25.- Desde ahora en adelante, ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces, con la única excepción que expresa el artículo 8º. respecto de los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución.

Artículo 26.- En consecuencia, todas las sumas de numerario que en lo sucesivo ingresen a las arcas de las corporaciones por redención de capitales, nuevas donaciones u otro título, podrán imponerlas sobre propiedades particulares o invertir las como accionistas en empresas agrícolas, industriales o mercantiles, sin poder por esto adquirir para sí, ni administrar ninguna propiedad raíz.

Artículo 27.- Todas las enajenaciones que, por adjudicación o remate, se verifiquen en virtud de esta ley, deberán constar por escrituras públicas, sin que contra éstas y con el objeto de invalidarlas en fraude de la ley, puedan admitirse en ningún tiempo cualesquiera contra-documentos, ya se les dé la forma de instrumentos privados o públicos, y a los que pretendieren hacer valer tales contra-documentos, así como a todos los que los hayan suscrito, se les perseguirá criminalmente como falsarios.

Artículo 28.- Al fin de cada semana, desde la publicación de ley, los escribanos del distrito enviarán directamente al ministerio de Hacienda, una noticia de todas las escrituras de adjudicación o remate otorgadas ante ellos, expresando la corporación que enajena el precio y el nombre del comprador. Los escribanos de los estados y territorios enviarán la misma noticia al jefe superior de Hacienda respectivo, para que las dirija al ministerio. A los escribanos que no cumplan con esta obligación, por sólo el aviso de la falta que dé el ministerio o el jefe superior de Hacienda a la primera autoridad política del partido, les

impondrá ésta gubernativamente, por primera vez, una multa que no baje de \$100, ni exceda de \$200, o en defecto de pago, un mes de prisión; por segunda vez, doble multa o prisión y por tercera un año de suspensión de oficio.

Artículo 29.- Las escrituras de adjudicación o remate se otorgarán a los compradores por los representantes de las corporaciones que enajenen; más si éstos se rehusaren, después de hacerles una notificación judicial para que concurran al otorgamiento, se verificará éste en nombre de la corporación por la primera autoridad política o el juez de 1ª instancia del partido, con vista de la cantidad de renta designada en los contratos de arrendamiento o en los últimos recibos que presenten los arrendatarios.

Artículo 30.- Todos los juicios que ocurran sobre puntos relativos a la ejecución de esta ley, en cuanto envuelvan la necesidad de alguna declaración previa, para que desde luego pueda procederse a adjudicar o rematar las fincas, se substanciarán verbalmente ante los jueces de 1ª instancia, cuyos fallos se ejecutarán sin admitirse sobre ellos más recursos que el de responsabilidad.

Artículo 31.- Siempre que, previa una notificación judicial, rehusé alguna corporación otorgar llanamente sin reservas ni protestas relativas a los efectos de esta ley, recibos de los pagos de réditos o redenciones que hagan los nuevos dueños, quedarán éstos libres de toda responsabilidad futura en cuanto a esos pagos, verificándolos en las oficinas respectivas del gobierno general, las que los recibirán en depósito por cuenta de la corporación.

Artículo 32.- Todas las traslaciones de dominio de fincas rústicas y urbanas que se ejecuten en virtud de esta ley, causarán la alcabala de 5% que se pagará en las oficinas correspondientes del gobierno general, quedando derogada la ley de 13 de febrero de año, en lo relativo a este impuesto en las enajenaciones de fincas de manos muertas. Esta alcabala se pagará en la forma siguiente. Una mitad en numerario y la otra en bonos consolidados de la deuda interior, por las adjudicaciones que se verifiquen dentro del primer mes; dos terceras partes en numerario y una tercera en bonos por las que se hagan en el segundo, y sólo una cuarta

parte en bonos y tres cuartas en numerario por las que se practiquen dentro del tercero. Después de cumplidos los tres meses, toda la alcabala se pagará en numerario.

Artículo 33.- Tanto en los casos de adjudicación como en los de remate, pagará esta alcabala el comprador, quien hará igualmente los gastos del remate o adjudicación.

Artículo 34.- Del producto de estas alcabalas se separará un millón de pesos, que unidos a los otros fondos que designará una ley que se dictará con ese objeto, se aplicará a la capitalización de los retiros, montepíos y pensiones civiles y militares, así como a la amortización de alcances de los empleados civiles y militares en actual servicio.

Artículo 35.- Los réditos de los capitales que reconozcan las fincas rústicas o urbanas que se adjudiquen o rematen conforme a esta ley, continuarán aplicándose a los mismos objetos a que se destinaban las rentas de dichas fincas.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de México, a 26 de junio de 1856,

Ignacio Comonfort

Al ciudadano Miguel Lerdo de Tejada

Y lo comunico a vuestra excelencia [V. E.] para su inteligencia y exacto cumplimiento.

Dios y Libertad, México, junio 26 de 1856.

Lerdo de Tejada

Excmo. señor gobernador del estado de...

RATIFICACIÓN
DEL DECRETO SOBRE DESAMORTIZACIÓN

Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito Público

Sección 5ª.

El excelentísimo señor Presidente sustituto de la República, se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

El ciudadano Ignacio Comonfort, Presidente sustituto de la República Mexicana, a los habitantes de ella, sabed:

Que el Congreso Constituyente, en uso de la facultad que tiene revisar los actos del Ejecutivo, decreta lo que sigue:

Se ratifica el decreto de 25 del corriente, expedido por el gobierno sobre desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de la república.

Dado en México, junio 26 de 1856.

Antonio Aguado,
Presidente

José María Cortés y Esparza
Diputado secretario

Juan de D. Arias,
Diputado secretario

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Palacio del Gobierno Nacional en México, junio 28 de 1856.

Ignacio Comonfort

Al ciudadano Miguel Lerdo de Tejada

Y lo comunico a usted para su inteligencia y fines consiguientes.

Dios y Libertad. México, junio 28 de 1856.

Lerdo de Tejada

CIRCULAR RELATIVA A LA LEY ANTERIOR

Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito Público

Excelentísimo señor:

El día 25 del actual ha tenido a bien el Excmo. señor Presidente sustituto de la República, con acuerdo unánime de su ministerio, expedir la ley de que acompaño a vuestra excelencia [V. E.] ahora ejemplares; y aunque esta disposición es una de aquellas cuya conveniencia no puede ocultarse, ni aún a las personas menos conocedoras de las verdaderas causas del atraso en que se encuentra nuestro país y de los medios que deben adoptarse para hacerlas desaparecer, quiere su excelencia [S. E.] que manifieste a V. E. cuáles son las principales miras que se ha propuesto al dictarla, a fin de hacerle ver claramente su pensamiento, no dudando que procurará evitar el que en el estado de su digno mando, los enemigos del bienestar y engrandecimiento de nuestra sociedad, siempre incansables en su propósito de extraviar las ideas del pueblo sobre las cuestiones que más de cerca afectan sus intereses, distraigan la opinión pública en un negocio de tan vital importancia para la nación.

Dos son los aspectos bajo los cuales debe considerarse la providencia que envuelve dicha ley, para que pueda apreciarse debidamente; primero, como una resolución que va a hacer desaparecer uno de los errores económicos que más han contribuido a mantener entre nosotros estacionaria la propiedad e impedir el desarrollo de las artes e industrias que de ella dependen; segundo, como una medida indispensable para allanar el principal obstáculo que hasta hoy se ha presentado para el establecimiento de un sistema tributario, uniforme y arreglado a los principios de la ciencia, movilizandó la propiedad raíz, que es la base natural de todo buen sistema de impuestos.

Bajo el primer aspecto basta, sin duda, fijar la atención sobre el beneficio que inmediatamente ofrece esta disposición en lo particular a los actuales inquilinos o arrendatarios de las fincas de corporaciones, así como sobre el que en lo general producirá a la sociedad el que se ponga en circulación esa masa enorme de bienes raíces que hoy se hallan estancados y, por último, en el impulso que recibirán las artes y oficios por las continuas mejoras que se harán a todas las fincas nuevamente enajenadas, desde el momento en que se conviertan en propiedad de particulares, objeto ya de libres permutas, para que se comprendan todos los buenos resultados que de ella deben esperarse.

Bajo el segundo punto de vista, independientemente de los recursos que desde luego recibirá el erario nacional por el impuesto sobre las traslaciones de dominio que en virtud de esta ley deben verificarse, recursos que en el difícil periodo que hoy atraviesa la república pondrán al gobierno en aptitud de cubrir las preferentes atenciones de la administración pública, sin ocurrir a los medios ruinosos que, por desgracia, se han estado empleando de mucho tiempo a esta parte, se propone al Excmo. señor Presidente formar una base segura para el establecimiento de un sistema de impuestos, cuyos productos, sin cegar las diversas fuentes de la riqueza pública, basten a llenar las necesidades del gobierno y permitan a este abolir de una vez para siempre todas gabelas que, como una funesta herencia de la época colonial, se conservan hasta el día entre nosotros, entorpeciendo el comercio con notable perjuicio de la agricultura, de las artes, de la industria y de toda la nación.

Tales son los grandes fines que el Excmo. señor Presidente desea alcanzar con providencia, y creo deber llamar muy especialmente la atención de V. E. sobre la circunstancia de que para la realización de tan importantes objetos no se adopten en la ley de que me voy ocupando ninguna de estas medidas violentas que para igual intento se han empleado en otros países, con ofensa de los principios eternos de la justicia y de la moral pública, pues convencido profundamente S. E. de que la más sabia política no es aquella que tiende a destruir estos o los otros existentes, sino la que pone a todos ellos en armonía para que así

unidos contribuyan al gran fin a que México, como todas las sociedades humanas, tiene derecho a aspirar, cual es el de mejorar progresivamente su condición, ha procurado con el mayor esmero que en esta disposición queden conciliados los grandes intereses que por ella pudieran ser afectados.

Estos grandes intereses, que no son otros que los de las corporaciones poseedoras de las fincas que deben enajenarse y los de los actuales inquilinos o arrendatarios de ellas, notará V. E. que se encuentran perfectamente conciliados por las disposiciones de la ley, pues las primeras continuarán disfrutando las mismas rentas que hoy tienen, para que puedan seguir las aplicando a los objetos de su institución, al paso que los segundos, convertidos en propietarios de las fincas que poseen en arrendamiento, no tendrán ya que temer para lo sucesivo el verse despojados de las ventajas que disfrutaban en la actualidad, como sucedería necesariamente en el caso de que dichas fincas fueran adjudicadas a un tercero.

Es también una circunstancia digna de notarse, la de que al dictar el Excmo. señor Presidente esta medida, muy lejos de seguir las ideas que en otras épocas se han pretendido poner en planta con el mismo fin, expropiando absolutamente a las corporaciones poseedoras de esos bienes en provecho del gobierno, ha querido más bien asegurarles ahora la percepción de las mismas rentas que de ellas sacaban porque bien persuadido S. E. de que el aumento de las rentas del erario no puede esperarse sino de la prosperidad de la nación, ha preferido a unos ingresos momentáneos en el tesoro público, el beneficio general de la sociedad, dejando que reciba directamente todas las ventajas que resulten de las operaciones consiguientes a cuanto se dispone en dicha ley.

Con esta importante providencia, cree el Excmo. señor Presidente dar a la Nación un testimonio incontestable de los vehementes y sinceros deseos que lo animan para ejecutar con mano firme todas las reformas sociales que tanto tiempo está reclamando la república, para entrar francamente en la senda única que puede conducirla al bienestar y felicidad de que cada día se ve más lejana por la acción combinada de los errores que quedaron en ella arraigados de la época colonial y por las

miserables y estériles revueltas que después de su emancipación política la han mantenido en perpetua agitación.

Treinta y cinco años ha que el libertador de México, al penetrar en esta capital al frente de su ejército vencedor, excitaba a los mexicanos a saludar llenos de júbilo el gran día de la independencia nacional, dirigiéndoles, entre otras, estas elocuentes palabras: ya sabéis el modo de ser libres: a vosotros toca señalar el de ser felices. Y, sin embargo del profundo pensamiento que encerraban aquellas memorables palabras, que equivalían a decir llegad al fin, puesto que ya tenéis el medio; y a pesar de la solemnidad del momento en que fueron pronunciadas ¡bochornoso es decirlo! los años han pasado uno tras otro, no dejando en pos de sí otra huella que la de las maldades o desaciertos que producen comúnmente los frecuentes trastornos en una sociedad, cuando no tienen por objeto sino la satisfacción de mezquinos intereses y de bastardas pasiones, y es, por cierto, un hecho digno de notarse, el de que entre tantos caudillos como han brotado de nuestras revueltas, no haya habido uno solo que aspirase a la gloria de realizar el gran pensamiento que dejó iniciado el héroe de Iguala, para lo cual bastaba ponerse con inteligencia y energía al frente de los intereses de la sociedad, dando acción y vida a todos los elementos de prosperidad que encierra la república.

El Excmo. señor Presidente, cuyo corazón se conmueve al observar la miserable condición en que se halla la inmensa mayoría de la nación y, penetrado, como lo está por otra parte, de que tal situación no puede mejorarse en medio del desconcierto general a que por desgracia ha llegado la sociedad, sino creando en ella todos los que puedan identificarse con las ideas del orden y del progreso bien entendido y dictando a la vez sucesivamente todas las medidas convenientes para regularizar la administración pública en todos sus ramos, tiene la firme resolución de marchar por esta senda, sin que basten a detenerlo los obstáculos que puedan presentársele, porque cualquiera que sea el resultado de sus trabajos y sacrificios, S. E. confía en que serán siempre apreciadas sus rectas intenciones y tiene, además, la noble de que siguiendo el camino que se ha trazado, cuando concluya el corto período

de la administración que le ha tocado en suerte presidir, podrá contar con un grato recuerdo en el corazón de todos los buenos mexicanos

Para la realización de estas miras, cuenta S. E. con la eficaz y decidida cooperación de la parte sensata y honrada de la nación y muy especialmente con la de las personas que se hallan al frente de los negocios públicos, no dudando por lo mismo que V. E. con la ilustración y patriotismo que más de una vez tiene acreditados, secundará sus providencias, poniendo en acción para ello todos los recursos de su autoridad.

Al comunicar a V. E. de suprema orden, cuanto llevo expuesto, tengo la satisfacción de reiterarle las seguridades de mi consideración y particular aprecio.

Dios y Libertad. México, junio 28 de 1856.

Lerdo de Tejada

LOS ADVERSARIOS
LE ATRIBUYEN UNA FALSA CARTA

Oaxaca, julio 1 de 1856

Señor don Matías Romero

Mi querido amigo:

Recibí su grata de fecha 24 de junio último y le agradezco la tira impresa que me remitió y que con tanta oportunidad ha visto la luz pública.

Ha sido una infame superchería de los enemigos el fingir una carta mía con el fin de desconceptuarme; pero afortunadamente no faltan personas que me conozcan y que puedan desmentir semejante calumnia.

Deseo saber lo que haya habido sobre la convención española. Por este último correo se me dice que era casi seguro que habría un rompimiento. Espero me diga usted lo cierto que sepa.

En el acto mandé entregar la cartita que me incluyó usted para el señor su hermano, que la recibió.

No me ha mandado la contestación para incluísela. Supongo que lo habrá hecho por separado.

Aquí no hay novedad. Celebraré que goce usted de buena salud y que ordene lo que guste a su amigo afectísimo y seguro servidor q. b. s. m.

Benito Juárez

COMENTA CON DESPRECIO
LA ACTITUD DE SANTA ANNA

Oaxaca, julio 10 de 1856

Señor don Matías Romero
México

Mi muy estimado amigo:

Recibí y le agradezco a usted mucho la tira impresa que me remite, relativa a un negocio mío particular. Es mío en efecto el párrafo que se inserta y que escribí con motivo de la superchería de que allí se hace mención. Está ya conocida la falsedad de la carta que se supone escribí al Sr. Traconis y esto basta para mi intento.¹⁶

Nada extraño será que Santa Anna ofrezca sus servicios a la coalición europea por ver si así logra volver a oprimir a los mexicanos; pero las gentes en Europa, que conocen bien su torpeza e incapacidad, lo verán con desprecio; y en caso de que les convenga el instrumento, será más bien para arrojarlo entre los mexicanos que sabrán escarmentarlo debidamente.

¹⁶ El párrafo a que se refiere el señor Juárez fue publicado el 28 de junio de 1856 en *El Siglo*, periódico de la ciudad de México, indicando que se trataba de un fragmento de carta del Sr. Juárez a un amigo y era lo siguiente: “Se ha cometido aquí la infame superchería de fingir una carta mía, dirigida al Sr. Traconis insultándole e invitándole a una rebelión, según ese mismo señor que dice en una carta que me contesta lleno de enojo. Ya le escribo para que me remita dicha carta que se supone mía, para averiguar quién fue su autor. Como puede suceder que se hayan mandado otras a otras personas notables, lo aviso a usted para que lo contradigo, en el concepto de que no estoy ni imbécil para insultar e invitar a la rebelión a persona alguna”.

Si supiere usted algo más sobre este negocia, espero me lo comunique, lo mismo que lo demás que ocurra en esa capital.

La carlita que usted me incluyó, la mandé entregar a su título. Vea usted en que otra puede servirle su amigo afectísimo y seguro servidor q. b .s .m.

Benito Juárez

SE ESTABLECE POR JUÁREZ EL CONSEJO DE SALUBRIDAD

Artículo 1º.- Se establece un consejo superior de salubridad, compuesto de 5 profesores de medicina y cirugía y 2 de farmacia los cuales serán nombrados por el gobernador del estado.

2º.- Para ser individuo del consejo se requiere tener por lo menos 6 años de ejercicio en la profesión respectiva.

3º.- El consejo nombrará al Presidente que se renovará cada año.

4º.- La secretaría del consejo será servida por los secretarios de la antigua junta de sanidad, los cuales continuarán desempeñando las mismas obligaciones que les impuso la ley de 14 de junio de 1844 mientras el consejo expide un reglamento relativo al mejor cumplimiento de sus deberes.

5º.- Las facultades y obligaciones del consejo son:

Primera: Examinar a los que pretendan recibirse de profesores en medicina, cirugía, farmacia o alguno de los ramos accesorios, dando cuenta al gobernador del resultado, para que en su caso expida los títulos correspondientes.

Segunda: Cuidar de que no ejerzan ninguno de los ramos de la medicina personas que carezcan de un título legal.

Tercera: Visitar las boticas y hospitales por lo menos dos veces en el año sin perjuicio de hacerlo cuando el ayuntamiento la excite, en cuyo caso practicará la visita con el regidor comisionado y el síndico de la municipalidad.

Cuarta: Cuidar de que sólo en las boticas se expendan medicamentos de alguna importancia y muy particularmente los conocidos por medicinas secretas.

Quinta: Formar una cartilla para las parteras, en la cual se comprenderán los conocimientos más necesarios del arte y las operaciones a que aquéllas deben limitarse. En el reglamento de que trata

el Art. 7º. de esta ley se designará por el consejo la manera con que deba darse instrucción.

Sexta: Dar las consultas médico-legales que los jueces y tribunales tuvieran a bien pedirle.

Séptima: Formar 2 reglamentos, 1 de procedimientos médicos legales y otro de policía médica o higiene pública; los cuales remitirá al gobierno para su aprobación.

Octava: Dar aviso al gobernador de las infracciones de esta ley y sus reglamentos de policía médica para que la autoridad política los castigue imponiendo multas desde 5 hasta 200 pesos.

Novena: Proponer al gobierno cuanto le parezca conducente a la policía médica o a la higiene pública, y consultarle sobre objetivos siempre que se le pida su dictamen.

6º.- Los ayuntamientos del estado continuarán nombrando las comisiones permanentes de salubridad pública de que habla el artículo 9 de la ley de 14 de junio de 1844 en los términos que él establece; y dicha comisiones en todo lo relativo al objeto de su institución se entenderán directamente con el consejo.

7º.- El consejo, a los 2 meses a lo mal de su instalación formará un reglamento económico para el mejor desempeño de las atribuciones que se le encomiendan por esta ley, remitiéndose al gobierno para su aprobación.

Oaxaca, Julio 16 de 1866

M. Dublán,
secretario

LA GRAN BRETAÑA APOYA A MERCADERES:
CASO BARRON Y FORBES

Oaxaca, agosto 4 de 1856

Señor don Matías Romero

Mi estimado amigo:

Celebraré mucho que, como me anuncia el Sr. de la Rosa, sustituya o reemplace al Sr. Morales, pues es digno de ese puesto y se quita de los compromisos que son consiguientes en el ministerio que ahora actualmente desempeña.

Siento las nuevas dificultades que presenta el negocio de Barrón y Forbes pues más distraen la atención del gobierno que ahora debe emplearse exclusivamente en la conservación del orden público. No deje usted de comunicarme los pormenores que me indica se recibirán pronto.

Aquí no hay novedad. Consérvese usted sin novedad y ordene lo que guste a su amigo afectísimo y seguro servidor q. b. s. m.

Benito Juárez

LE ALARMA LA RECLAMACIÓN DEL
GOBIERNO INGLÉS

Oaxaca, agosto 7 de 1856

Señor don Matías Romero

Mi muy querido amigo:

Muy alarmante ha sido para mí la noticia que me da usted de la reclamación que hace el gobierno inglés al nuestro, por que en las presentes circunstancias es un nuevo elemento que sabrán explotar los enemigos para ponernos en desconcierto. Sin embargo, tengo la esperanza que el señor ministro respectivo dé a este asunto el giro que sea menos desfavorable a los intereses de México y de que el negocio reciba una solución pacífica.

Aquí no hay novedad, sino muy buen sentido en los pueblos para sostener a la presente administración de la república.

Deseo que se encuentre con muy buena salud y que ordene lo que guste a su amigo afectísimo y seguro servidor q. b. s. m.

Benito Juárez

TEMORES DE FRASCA CON LOS INGLESES

Oaxaca, septiembre 4 de 1856

Señor don Matías Romero
México

Mi estimado amigo:

Quedo impuesto por su grata de 20 de agosto último, de la renuncia del Sr. de la Rosa y del nombramiento del Sr. Fuente, para ministro en Relaciones.

Opino como usted, que es difícil que el ministro inglés pase por la propuesta que ha hecho nuestro gabinete, y no será remoto que pronto tengamos una frasca con los ingleses: pero debemos descansar en la justicia de nuestra causa y contar con el patriotismo de los mexicanos, para salir airoso en la contienda. Sin embargo, todavía tengo esperanzas de que el calor con que procede el ministro inglés vaya bajando de punto y que al fin haya un arreglo pacífico como en el negocio de España.

No deje usted de comunicarme lo que vaya ocurriendo en este asunto según me ofrece, ordenando lo que guste a su amigo afectísimo y seguro servidor q. b. s. m.

Benito Juárez

EL CLERO POLÍTICO INCITA A LA DESOBEDIENCIA

Excelentísimo [Excmo.] señor gobernador del estado de Oaxaca

Excmo. señor:

Con profundo disgusto ve el Excmo. señor Presidente que los prelados eclesiásticos expiden pastorales y circulares en que de una manera positiva se ataca al supremo gobierno y se incita abiertamente a la desobediencia, como ya ha sucedido en varios pueblos en que con pretexto de la ley de desamortización se ha pretendido subvertir el orden público. Esta conducta que en cualquiera circunstancia seria culpable, lo es mucho mas hoy que por mil motivos están agitadas todas las pasiones. Por lo mismo es un deber del gobierno, más estrecho que nunca, impedir el mal para no verse en la forzosa necesidad de castigar a los que lo causen. En consecuencia, dispone el Excmo. Presidente que vuestra excelencia [V. E.] cuide de que esas circulares no se publiquen, ni por la ni de otro modo; que impida su lectura en las iglesias; que recoja las que se hubieren impreso, y que si los eclesiásticos turbasen el orden o incitasen a la desobediencia de este modo o de otro cualquiera, les sujete V. E. a las autoridades competentes y si este no fuere posible, les haga salir del lugar de su residencia señalándoles otro en que su influencia no sea perniciosa, pudiendo en caso hacerles venir a esta capital y avisando inmediatamente de cuanto para que el gobierno determine lo conveniente. El buen juicio de V. E. y su conocido patriotismo normarán su conducta a fin de que se eviten lo males sin que las personas sufran, cuando sea absolutamente necesario para la conservación del orden público.

De suprema orden lo comunico a V. E. para su cumplimiento;
reiterándole las seguridades de mi consideración.

Dios y Libertad, México, 6 de septiembre de 1856.

(José Maria) Lafragua

SOLICITA LA SUPRESION DEL TERRITORIO DE
TEHUANTEPEC Y SU REINCORPORACIÓN A OAXACA

Al soberano Congreso Constituyente
(México)

Señor:

El gobernador de Oaxaca, de acuerdo con su consejo, tiene la honra de dirigir a vuestra superioridad [V. S.] la presente exposición, con el objeto de que al tratarle el importante asunto de la *división territorial de la república*, se tengan presente en esa augusta asamblea las razones de justicia y conveniencia pública que existen para que se le conserven los mismos límites que de tiempo inmemorial lo han separado de sus vecinos.

Grave es sin duda la cuestión de límites, porque envuelve grandes intereses que afectan profundamente la paz y el progreso de los pueblos. Pero V. S., al tratar de los del estado de Oaxaca, tendrá, por cierto, menos dificultades; porque la misma naturaleza ha creado los puntos de división que lo separan de los estados limítrofes. Ni por el sur, ni por el norte existe el más ligero inconveniente, porque por aquel viento es el mar Pacífico el término del territorio y por éste linda con el estado de Veracruz, con quien jamás ha ocurrido diferencia alguna. Lo mismo puede decirse por el oeste, que tiene por vecinos a Guerrero y a Puebla; más con éste por el rumbo del oriente existe la cuestión relativa a las usurpaciones que se han hecho al pueblo de Teotitlán, por el propietario de Tilapa, usurpaciones sancionadas por el gobierno general de Santa Anna, sobre cuyo negocio he representado ya y hoy espero se tenga a la vista aquel expediente, para que como es justo y la conveniencia pública lo reclama, se restituya a este estado todo lo que perdió en el deslinde

que de orden del gobierno practicaron los licenciados don Pascual Almazán y don Manuel Pasos.

Al poco tiempo de establecida la dictadura, se creó por decreto de 11 de mayo de 1853 el territorio del Istmo, segregándole a Oaxaca, al efecto, parte del departamento de Tehuantepec, que en todo tiempo le había pertenecido. Es indudable que al dictarse semejante providencia, en lo que menos se pensó fue en los intereses de los pueblos, porque lejos de haber recibido un bien con haberles emancipado del punto que reconocían por centro, han sufrido perjuicios de incalculable trascendencia. Los hechos, señor, hablan más alto que cualquiera otra consideración que pudiera presentarse para confirmar aquella verdad. Apenas aquellas poblaciones tuvieron la oportunidad de expresar espontáneamente su voluntad a la caída del tirano, cuando todas a la vez pidieron las unas volver a Veracruz a que pertenecían, y las otras al estado que tengo la honra de mandar, ¿No es ésta la mejor prueba de la inconveniencia de la erección de ese territorio?

Tehuantepec, con algunos pueblos que formaban ese departamento, siempre ha dependido de Oaxaca, ya haya sido provincia, departamento o estado, recibiendo constante e inmediatamente todo género de protección. La naturaleza fijó el límite en la cordillera de montañas que lo separan de Chiapas. Tehuantepec será grande algún día; pero hoy la falta de población, la poca cultura y los escasos elementos que para gobernarse por sí encierra, exigen los auxilios eficaces y activos de un gobierno que, estando al alcance de sus necesidades, pueda impulsar sus adelantos. Erigido en territorio, además de alterarse sin justicia la división natural, que es la más exacta y será la mas duradera, no puede ser atendido debidamente por el gobierno general, por la distancia a que se encuentra. La línea divisoria marcada por la naturaleza y la conveniencia social son el mejor fundamento para pedir a V. S. se sirva decretar la supresión del territorio referido, mandando que los estados de Veracruz y Oaxaca recobren los pueblos que una plumada imprevista del dictador les separa.

Por los documentos que acompaño a esta exposición, verá V. S. que Tehuantepec voluntariamente en agosto de 1855, se reincorporó a

este estado, conociendo los grandes bienes que le resultan de estar unido a Oaxaca. En noviembre del mismo año, por mala fe o por ligereza de un empleado, creyéndose abandonado, pues consultaba si debía obedecer o no a Acayucan y se le contestó por la afirmativa, considerando rotos sus vínculos con este estado, puesto que no atendía sus consultas ni lo protegía como era su deber hacerlo, levantó una nueva acta declarándose territorio. En tal estado permanecieron las cosas por las convulsiones políticas ocurridas a fines del año anterior en esta capital, hasta que el supremo gobierno, por una orden comunicada por el ministerio de Gobernación en 19 de diciembre último, determinó que continuase el mencionado territorio hasta que V. S. resolviera lo más conveniente a la mejora y civilización de estos pueblos.

Ha llegado el caso de que V. S. se ocupe de este negocio, y Oaxaca no duda que con la ilustración y patriotismo de tan respetable asamblea, quedará resuelto de la manera más justa, consultándose los intereses que entraña tan importante cuestión. Las consideraciones que ligeramente se han indicado, son bastantes para fundar la necesidad de la supresión; más el soberano Congreso, meditando sobre este asunto, encontrará otras muchas razones que imperiosamente demandan la resolución que se solicita, y que este gobierno espera será favorable, porque eleva su voz apoyado en la justicia y en los verdaderos intereses de esta fracción de la república.

Protesto a V. S. mi más profundo respeto.

Dios y Libertad. Oaxaca, septiembre 17 de 1856.

Benito Juárez

LAMENTA LA SUSPENSIÓN DEL PERIÓDICO
SIGLO XIX

Oaxaca, septiembre 20 de 1856

Señor don Matías Romero

Mi querido:

Quedo impuesto por su grata de 13 del corriente de que por fin el ministro ingles suspendió las relaciones entre México y la Gran Bretaña. Sin embargo de esta manera violenta con que ese funcionario ha procedido, creo que el gabinete ingles verá la cosa con calma y al oír a nuestro enviado, se resolverá a dar término pacífico a este negocio.

Siento mucho la suspensión del *Siglo XIX*,¹⁷ tanto por el motivo que usted me indica y que en mi concepto no era conveniente ni decoroso a nuestra nación, cuanto por las circunstancias que usted justamente prevé van a resultar complicándose así más y más la situación del gobierno. ¡Dios quiera en la Cámara haya la calma suficiente para no exasperar los ánimos!

Entiendo que es infundado el rumor que ha corrido sobre el pronunciamiento de Tampico y líbrenos Dios de que fuera cierto pues tal ocurrencia vendría a consumir la guerra civil iniciada en Nuevo León.

Aquí seguimos en paz y unidos todos los oaxaqueños.

Deseo que se conserve usted con buena salud y que ordene lo que guste a su amigo afectísimo y seguro servidor q. b. s. m

Benito Juárez

¹⁷ Periódico diario de la ciudad de México, portavoz de los liberales puros.

OTRA VEZ LOS REACCIONARIOS ACTÚAN EN PUEBLA

¡Oaxaqueños!

Los enemigos de la libertad, aprovechando la separación del señor [Sr.] general [Gral.] Traconis, han logrado seducir una parte de la guarnición de Puebla, relegándose contra el gobierno establecido. Colocado al frente de vuestros destinos y encargado de la conservación de la paz pública, me he propuesto no ocultaros ningún hecho, ya porque se trata de vuestro intereses y ya porque el silencio pudiera considerarse como una muestra de la debilidad del gobierno. La reacción se presentaba en la misma ciudad, en marzo último, poderosa y pujante, y, sin embargo, visteis que los restos de la pasada tiranía, que hoy pretenden nuevamente levantar la cabeza, sucumbieron ante el incontrastable esfuerzo de los pueblos.

¡Compatriotas! Bien sabéis que a nadie he perseguido por sus opiniones políticas, ni una lágrima se ha derramado por mí causa; el gobierno del estado conoce a todas las personas que trabajan por trastornar el orden público, sigue sus pasos, está en sus más secretas maquinaciones y, sin embargo, no ha querido dictar una providencia de aquellas que, sin justicia, tan frecuentes eran en el gobierno que pasó. Considerando que la paz es la primera necesidad del pueblo, mi mayor interés ha sido alejar la guerra civil del estado. Pero si no obstante, la lenidad del gobierno, creyéndolo alguno débil porque procede con indulgencia, persiste en sus intentos. Procederé, con toda la energía que dan la fuerza y la opinión contra todo el que, olvidándose de sus deberes, pretenda subvertir la tranquilidad social.

¡Conciudadanos! El gobierno solamente trata de conservar la paz y de salvar vuestros derechos, amenazados hoy por la tiranía para llevar

adelante este propósito. Estad seguros que siempre se presentara el primero vuestro conciudadano y amigo.

Oaxaca, octubre 26 de 1856.

Benito Juárez

EL ASUNTO BARRÓN Y FORBES AL DESNUDO¹⁸

¹⁸ A fines de 1855 se produce en el cantón de Tepic, un incidente que provoca tirantez en las relaciones anglo-mexicanas.

Desde varios años atrás y, ante la anarquía reinante, los cónsules americanos e inglés, respectivamente, Guillermo Forbes y Eustaquio W., Barrón, hijo, habían acumulado una inmensa fortuna obtenida mediante el monopolio, contrabando y presiones políticas. Su casi omnipotente poder les permitía quitar y poner a las autoridades municipales y aduanales que eran, prácticamente, empleados suyos, extendiendo su influencia económica y política al campo militar, cada vez que los gobiernos de Jalisco solicitaban préstamos a estos individuos, para cubrir la paga de las guarniciones de San Blas y Tepic.

Conociendo el problema, Degollado, como gobernador de Jalisco, destituye a las autoridades municipales y los cónsules extranjeros promueven la sublevación de la guarnición de San Blas y Tepic, desconociendo el plan de Ayutla y a las autoridades surgidas de él (13-XII-1855).

Degollado va a combatir a los sublevados, quienes se dispersan. Forbes y Barrón se fugan en un buque nacional -embargado por el gobierno- sin los papeles en regla; se llevan a dos militares que organizaron la sublevación, un fuerte cargamento de plata sin ningún permiso aduanal y solicitan el auxilio de los gobiernos estadounidense e inglés. Vuelven a San Blas en la fragata inglesa *President*, desde donde dirigen a Degollado, en notas por separado, insolentes protestas, a las que se une otra del capitán de la nave, Frederick. Todos ellos reciben de don Santos la más digna respuesta, defendiendo con celo la integridad nacional ante un injusto apremio extranjero, pues Barrón lanzó una velada amenaza de intervención armada al decir que ya se había dirigido a Lettson, encargado de negocios de la Gran Bretaña, para que ordenara a las fuerzas navales británicas en la costa mexicana del Pacífico, que tomara las medidas necesarias a fin de proteger su persona e intereses.

El gobierno estadounidense negó el auxilio a Forbes, quien no tuvo más remedio que renunciar. Pero Barrón, a quien Degollado permite radicarse en San Blas obtiene, por intermedio de su padre, Eustaquio Barrón, que Lettson presente una nota formal de protesta al gobierno mexicano.

Degollado, sin hacer uso de las facultades de, que estaba investido, deja en manos de Comonfort la cancelación del *exequátur* del cónsul, pero la nota del encargado de negocios inglés y el escándalo que provocó con su dinero don

México, noviembre 1º de 1866

Excelentísimo señor licenciado don Benito Juárez
Oaxaca

Muy distinguido señor mío:

De intento me había yo abstenido de escribir antes de ahora a usted porque esperaba la llegada del último paquete inglés, para comunicarle las noticias de más importancia que trajera. Por desgracia, las que tengo que darle ahora, no son muy satisfactorias para la república y se las digo a pesar de su carácter reservado, porque considero útil a la causa pública que esté usted al tanto de ellas.

El Sr. González de la Vega, encargado de negocios de la república en Londres, ha manifestado que el gobierno inglés se negó a recibirlo en su carácter diplomático, por estar interrumpidas las relaciones de ese gobierno con el nuestro y que, por consiguiente, mucho menos recibiría

Eustaquio Barrón desde el periódico *El Monitor Republicano*, hicieron que Comonfort se inclinara por transar con el gobierno inglés.

En tanto, don Santos Degollado, que había enviado a Comonfort las solicitudes del ayuntamiento y de numerosos habitantes de Tepic para la expulsión del país de estos extranjeros perniciosos, que había obrado rectamente y por ello había recibido el estímulo y felicitación del Presidente Comonfort, tiene que sujetarse, primero, a una investigación que realiza el ministro de la Suprema Corte, Lic. José María Muñoz de Cote, después se le consigna al gran jurado del Congreso, juicio del que sale absuelto el 16 de febrero de 1857 y, por último, Barrón padre, lo acusa del delito de difamación. Con sentencia en su contra, Degollado pide amparo a la Corte y como el fallo tarda, decide hacer un viaje fuera del país. A pesar de su inmunidad es aprehendido y se presenta a la Corte para ser juzgado, declarándose el supremo tribunal incompetente para conocer del caso (12-V-1857).

Si en lo personal Degollado sufrió todo estos atropellos, en lo político el gobierno de México tuvo que soportar notas de protesta y la ruptura de las relaciones diplomáticas (24-IX-1856).

al Sr. Almonte; también ha comunicado que por este paquete se mandaron por el mismo gobierno a Mr. Lettson, órdenes muy fuertes y terminantes, sobre el asunto de Barrón y Forbes, hasta el extremo de autorizarle para romper abierta y formalmente con la república. Yo no podré decir a usted de cuántos buques se compone la escuadra que debe venir a bloquear nuestros puertos, de dónde ha salido, en dónde está ahora y cuándo llegará a nuestras aguas porque esto todavía no lo sé; pero sí puedo asegurarle que muy pronto nos veremos envueltos en una guerra con la Gran Bretaña, en la que de seguro sacaremos la peor parte. El doctor Gálvez, abogado y director de Barrón, cuya capacidad no le es desconocida a usted, ha empleado toda su astucia y talento en favor de la causa de éste y es, en gran parte, el que ha ocasionado tales complicaciones.

Barrón tiene copia de los documentos más interesantes y reservados en que se apoya la justicia de la nuestra; en esta capital, en Guadalajara y Tepic ha instruido averiguaciones sumarias en su favor, en las que han depuesto mexicanos respetables por su posición, para contraponerlas a la que instruyó en Tepic el Sr. Muñoz de Cote, y a las que se practicaron por orden del Sr. Degollado cuando estaba de gobernador en Jalisco. En Londres cuenta con el poderoso influjo de Doyle y con el de su abundante oro que derrama con profusión su apoderado Mr. Warrel, hasta el extremo de comprar al gabinete inglés presume fundadamente el Sr. González de la Vega, Se dice también - aunque esto no me consta- que a junta presidida por el Sr. Muñoz Ledo, a la que se en consulta el expediente del negocio referido, informo en términos muy favorables a Barrón y Forbes, de cuyo informe tienen ya éstos copia; lo que sí me consta a mí, es que en dicho expediente no aparece tal informe y que a Lettson se le dijo que había sido verbal. Pero lo que nos ha perjudicado más que todo es que lord Palmerston, director de la política británica, tiene una aversión profunda contra México, según dice el Sr. Vega, y quiere aprovecharse de este pretexto para hacerse pago de los dividendos vencidos en la convención inglesa y para asegurar de una manera definitiva sus intereses. Por lo expuesto conocerá usted la imposibilidad de que el gobierno inglés retire sus injustas demandas y lo

indecoroso que sería para el nuestro acceder a ellas en estas circunstancias.

En vano se solicita la mediación de la Francia, en vano los Estados Unidos nos ofrecen su apoyo, en vano se pretende someter la cuestión a un arbitraje, en vano el gobierno se hace ilusiones la Francia cuando más sus buenos oficios, ineficaces en el caso por la decisión obstinada de la Inglaterra, la alianza con los EU sería todavía más peligrosa y nosotros, desgraciadamente, no estamos en estado de pelear con un coloso. Además las disposiciones de nuestro gobierno son demasiado tardías y sin efecto; el Gral. Almanta hace de un mes que está en Veracruz y aún no se mueve de allí y todas las circunstancias conspiran en nuestra contra.

Al mismo tiempo que se le mandan instrucciones al Sr. Olaguíbel para que solicite la mediación del emperador de los franceses en nuestras actuales diferencias con la Gran Bretaña, se le extraña por haberse tomado 127,480 francos que el ministerio de Fomento tenía en el de Bruselas a disposición de don Andrés Negrete, ex-encargado de negocios de la república, para pagar los rieles y el locomotor que se mandaron a hacer en aquella ciudad para continuar el ferrocarril de Veracruz a esta capital. Esta circunstancia es más notable cuanto que al Sr. Olaguíbel sólo se le debía hasta el 31 de octubre último 1,131 libras oro. El ministro de Fomento ha manifestado los graves e irreparables perjuicios que resentirá la república por esta causa, pues se verá (privada) de tales útiles que servirían prolongar por leguas el camino de hierro, en cuyo caso produciría mensualmente el duplo de lo que ahora cuesta su construcción, el descrédito del gobierno en el extranjero si no cumple sus compromisos y las reclamaciones que sobre vendrán en que se cobrará un interés excesivo.

Supongo que estará usted impuesto de la sublevación del vapor de guerra nacional Demócrata y para que vea usted las disposiciones que de él ha tomado el gobierno de México, le adjunto una circular de las que se mandaron hoy a las legaciones y consulados en el exterior.

La reserva de las importantes noticias que ahora tengo el gusto de comunicarle, no creo necesario recomendársela a usted, pues usted, tan experimentado en estos negocios, hará el uso que le convenga.

Aprovecho esta oportunidad para repetirme de usted afectísimo muy atento y seguro servidor q. b. s. m.

Matías Romero

A última hora se dispuso en el ministerio de Relaciones que no se diera curso a la comunicación para el Sr. Olaguíbel de que hablé a usted antes.

(Romero)

PRESUME LOS OBJETIVOS DE LA SUBLEVACION
DEL VAPOR DEMOCRATA

Oaxaca, noviembre 8 de 1856

Señor don Matías Romero

Mi querido amigo:

Muy importantes y graves son las noticias que me comunica y que le agradezco mucho, pues ellas me sirven para calcular el curso que tomaran los sucesos y preparar a nuestro estado para que pueda cooperar con buen éxito a la hora del peligro.

Mucho celebro que no se haya llevado al cabo la resolución que se había dictado contra “O”,¹⁹ pues tal vez con su informe logre justificar su conducta.

Es indudable que la revolución de Querétaro y Puebla estaba combinada y ramificada en toda la república y ha sido una consecuencia de esa combinación la sublevación del vapor Demócrata. Presumo que su objeto es ir por los desterrados que existen en Cuba y los Estados Unidos; pero afortunadamente la revolución ha fracasado y sólo ha traído la ventaja de unir al partido liberal y de alentar al gobierno para obrar con la energía que debe a fin de consolidar la paz interior. Creo que ésta se obtendrá pronto y entonces tendremos lugar de prepararnos a la defensa del honor nacional.

¹⁹ Seguramente se refieren a cierta persona en clave. Parece ser Olaguíbel, mencionado en la carta anterior.

Nuestro estado disfruta de paz gracias a Dios y a la vigilancia que hemos tenido, pues los perturbadores del orden no cesan de trabajar.

Deseo que se encuentre usted con buena salud y que ordene lo que guste á su amigo que lo ama y b. s. m.

Benito Juárez

EXIGENCIAS DEL GOBIERNO ESPAÑOL EN EL COBRO DE CREDITOS DE SUS NACIONALES

México, noviembre 8 de 1856

Ciudadano señor licenciado don Benito Juárez
Oaxaca

Muy distinguido señor mío:

En mi última carta, tuve el gusto de poner en conocimiento de usted algunas noticias de suma importancia respecto del asunto de Barrón y Forbes; ahora tengo que comunicarle otras relativas a la convención española y que agregarle respecto de las primeras, que desde el día 1º. del actual mandó Mr. Lettson su ultimátum al ministerio de Relaciones, cuyo documento no ha aún de la del señor ministro.

El Sr. Sorela, encargado de negocios de España, comunicó ya que su gobierno no podía pasar por ningún artículo de los que arregló aquí el Sr. don Miguel de los Santos Álvarez sobre la convención y que se verá en el caso de reprobarlos absolutamente, porque dicho señor siguió un camino diametralmente opuesto al que le fijaron sus instrucciones.

No era posible que el gabinete de Madrid procediera de otro modo, pues desde que el gobierno de la república promovió la revisión de los créditos españoles, que han ocasionado la presente cuestión, se absoluta y obstinadamente el de su majestad providencial [S. M. P.] y el Sr. Álvarez, lejos de sostener esa negativa como se le previno y con cuyo objeto se pusieron a su disposición algunos buques de guerra, condescendió en más de lo que se solicitaba, supuesto que convino en la revisión de todos los créditos que entraron en la mencionada convención.

En España se hacen grandes aprestos para mandar una escuadra a nuestros puertos y, aunque la posición actual de la península no le permitirá sostener por mucho tiempo la guerra con nosotros, sí tiene los recursos suficientes para empezarla y para ocasionarnos graves perjuicios.

Cuando haya noticias ciertas sobre el particular, tendré el gusto de comunicárselas a usted.

Hoy se ha dicho aquí que el Sr. Garza ha tomado a Monterrey después de haber derrotado al Sr. Vidaurri, a quien según dicen tiene preso.

Sin tiempo para más aprovecho esta ocasión repetirme de usted afectísimo y seguro servidor q. b. s. m.

Matías Romero

ESTAMOS MAL EN NUESTRAS RELACIONES

Oaxaca, noviembre 15 de 1856

Señor don Matías Romero

Mi querido amigo:

Estamos mal con respecto a relaciones extranjeras según se sirve usted decirme en su carta de 8 del corriente, pues aunque al fin en un conflicto la victoria sea nuestra, siempre sufriremos mucho porque nuestros elementos son escasos. Quiera Dios poner pronto término a la guerra civil para que tengamos tiempo de prepararnos para la extranjera.

Nuestro estado disfruta de tranquilidad, pero a costa de gastos y sacrificios.

Agradezco a usted mucho el cuidado que tiene de comunicarme lo importante que ocurre y me repito su amigo afectísimo y seguro servidor q. b. s. m.

Benito Juárez

DISCURSO PRONUNCIADO POR JUÁREZ EN EL INSTITUTO
DE CIENCIAS Y ARTES DEL ESTADO,
AL FIN DEL AÑO ESCOLAR

Señores director y catedráticos:

Cuando en enero del corriente año me encargué del gobierno del estado, fue uno de mis primeros cuidados la reorganización de establecimiento que la mano del despotismo había cerrado, porque los déspotas aborrecen la luz y la verdad. Expedí el decreto de 14 de enero restableciendo el de 29 de julio de 1852, dado por la Legislatura del estado; escogí personas que por su saber y virtudes se encargasen de la enseñanza, y me presenté a la reinstalación del instituto, entregando a vuestro cuidado y dirección a la juventud oaxaqueña, que sedienta de saber se presentaba al santuario de las ciencias demandando protección y amparo.

Vosotros, señores, aceptasteis tan honroso encargo, ofreciendo con solemne juramento cumplir con vuestros deberes. Emprendisteis, en consecuencia, vuestras tareas y ni las penurias del tesoro que manos impuras agotaron, ni lo módico de vuestras retribuciones ni los constantes amagos de los perturbadores de la paz pública, han sido bastantes para retraeros de vuestras nobles lucubraciones, y he aquí que a la vuelta de diez meses de fatigas y zozobras presentáis al público el fruto de vuestros desvelos.

El aprovechamiento y adelantos precoces que han manifestado vuestros alumnos en sus funciones literarias, las honrosas calificaciones que han obtenido en sus exámenes y la fina educación que revelan sus modales, son, en verdad, su más bello ornamento, son la corona de triunfo que ciñe sus frentes en noche solemne y forman justamente vuestro cumplido elogio.

Sea para bien, señores director y catedráticos. El gobierno del estado, a nombre de esa preciosa juventud, esperanza de la patria, a nombre de los de familia, que se interesan por la educación de sus hijos, os da las gracias por vuestros afanes y desvelos. Retiraos a descansar de vuestras tareas en el corto tiempo que os concede la ley, y volved a continuarlas con el mismo empeño que hasta aquí, bajo la seguridad de que el gobierno dispensará a este seminario de las ciencias, toda la protección que cabe en sus facultades; y no temáis que otra vez el desorden y la anarquía vuelvan a interrumpir vuestros trabajos, porque el gobierno vela por el reposo público y cada día se siente mas fuerte y vigoroso para reprimir con mano fuerte a los tenaces enemigos de la ilustración y de la paz.

Noviembre 30 de 1856

GADSDEN SE RETIRA DE SU PUESTO DIPLOMÁTICO,
MOLESTO Y OFENDIDO

México, octubre 23 de 1856

A su excelencia el señor don Juan Antonio de la Fuente
Ministro de Relaciones Exteriores

El infrascrito, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de los Estados Unidos, tiene la honra de acusar recibo de cuatro comunicaciones del 20 y 22 del actual que le ha dirigido su excelencia [S. E.] el Sr. don Juan Antonio de la Fuente, ministro de Relaciones Exteriores. A la en que pide al infrascrito copia del discurso que se proponía pronunciar al cesar en sus relaciones diplomáticas cerca del gobierno de México, el infrascrito respetuosamente contesta refiriéndose a la nota de 22 del corriente que tuvo la honra de dirigir a S. E. comunicándole la penosa dispensa por la cual se le prohibía estar presente en entrevista; y que había confiado a su sucesor, que debe ser acreditado, la entrega del pliego sellado que estaba encargado por el Presidente de los Estados Unidos de presentar al de la República de México, La otra comunicación de S. E. la pasará el infrascrito a su sucesor el honorable Sr. Juan Forsyth, para que obre en asuntos que ahora le entrega como enviado extraordinario de los Estados Unidos.

El infrascrito, sin embargo, no puede retirarse del puesto que ha ocupado tanto tiempo cerca del gobierno mexicano sin hacer mención de la vuelta descortés de una comunicación que había tenido la honra de incluir, dirigida a S. E. "y del despacho de justicia" imputándole ignorancia acerca de la manera irregular de dirigir comunicaciones a uno de los ministros de Estado que no fuese S. E. que está encargado de las Relaciones Exteriores.

La comunicación que S. E. ha tratado de un modo tan ofensivo no tiene ninguna conexión con las relaciones políticas de los países que respectivamente representan, pues era simplemente una petición legal que el abogado dé la parte pudiera dirigido al ministro de Justicia sin experimentar repulsa; pero los acusados en el negocio de que se trata, ciudadanos de los Estados Unidos, solicitaron fuese presentada por conducto de su ministro, como su superior, director y protector. Ella fue devuelta por conducto del ministro de Relaciones hace 20 días por instancias de S. E., mismo, el Sr. don Ezequiel Montes con una nota muy cortés diciendo “que si la solicitud viniere por los conductos prescritos, obtendría una pronta y política respuesta”. El infrascrito, por lo mismo, devuelve la comunicación que le ha sido enviada, con el sello roto, a fin de que S. E. pueda satisfacerse de que en ella no traición ni conspiración oculta, en sus dobleces, con cualquiera otro de los consejeros de Estado; esperando confiadamente que S. E. reconocerá ahora la obligación que tiene como ministro del Exterior, y por las razones manifestadas en la solicitud dirigida al ministro del Interior, de devolver el original o copia del registro de la barca *Archivaldo Gracia* que fue quitada por fuerza al capitán Denison con otros papeles de valor para él en el arresto e ilegal confiscación del buque americano.

El infrascrito había esperado que se le habría permitido retirarse de sus relaciones diplomáticas con el gobierno de México, sin ningún sentimiento desagradable o molesto y en la nota que dirigió a S. E. ayer haciendo referencia a su retiro y a la traslación de sus responsabilidades oficiales a su sucesor, no puede encontrarse ninguna expresión que indique otros sentimientos que una aceptación voluntaria y conforme a la rotura de sus relaciones, espontáneamente pedida por el gobierno mexicano y correspondida cortésmente por su parte. El ministro retirado, sin embargo, tanto por su parte como por el gobierno que ha representado, no puede permitir el tono de la carta de S. E. fecha 20 del corriente y cuya se detuvo el 23, sin hacer la observación de que si tenía por objeto ofender personal u oficialmente al infrascrito en el momento en que pasaba las funciones de su alto encargo a un sucesor más aceptable, él lo recibe con el espíritu con que ha sido dictada; ya sea

oficial o personalmente, por el gobierno de que S. E. es el órgano exterior.

Con distinguida consideración.

Santiago Gadsden